

**I.PROTOCOLO DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE LEY QUE
REGULA EL NUEVO SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA con relación al PROYECTO DE LEY
QUE CREA EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ. Junio 2019**

Analizados los contenidos de los actuales proyectos de ley que regulan el nuevo servicio de protección especializada a niñez y la adolescencia, Boletín N ° 12.027-07 , y el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, Boletín N ° 10.315-18, así como las propuestas realizadas por académicos, organizaciones civiles, centros de estudios y demás expositores oídos en la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes con ocasión de la tramitación del Boletín N ° 12.027-07, y con el fin de viabilizar la tramitación del Proyecto de Ley del Servicio , se propone la firma de un Protocolo de Trabajo con el Ejecutivo referido a las siguientes materias:

**I. MATERIAS NO REGULADAS NI EN EL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS DE LA NIÑEZ
NI EN EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y QUE DEBEN
INCORPORARSE EN AMBOS**

1. Trasladar la regulación de las Oficinas Locales de Protección al PL del Servicio para dejar toda la coordinación con la subsecretaría y con las OCAS y el inter sector claro y regulado en este PL
2. Total clarificación de lo que incluye la protección especializada administrativa (la que precisamente presta el Servicio, las Ocas y el inter sector): las autoridades competentes para cada etapa del proceso, la forma en la que la gente accede a ella, los procedimientos para desarrollarla, la gestión y derivación de los casos a las ocas, derivación a los otros servicios del Estado, derivación de los casos a la Protección Judicial cuando sea que ello proceda.
3. En especial, Procedimiento de ingreso de los casos al sistema de protección administrativa especializada: ¿por cuales razones un niños o adolescente puede ingresar a ser atendida por el servicio o las ocas y cómo una familia podrá ser

“invitada” o “conminada” a hacerse una evaluación diagnóstica en una OCA que se haya adjudicado un Programa de Diagnóstico, que según el artículo 20 sería la puerta de entrada al sistema?

4. Etapas y Derechos de un debido proceso para la intervención de protección administrativa.
5. Una mayor definición y claridad de las líneas de acción y programas que aclararen cuales serían las prestaciones concretas que entregaría el Servicio y en qué casos o hipótesis, dado que el lenguaje empleado no es claro ni preciso. Este PL modifica la actual Ley 20.032 de Ocas y su subvención que actualmente regula las Líneas y Programas, de modo que lo que este PL del Servicio no regule claramente al respecto, en la práctica sólo será regulado luego vía reglamento.
6. Una norma clara que trasladase la fiscalización del Servicio y a las ocas hacia la Subsecretaría de la Niñez.
7. Sistema de alerta temprana y conexión e interacción con el Servicio.
8. Trabajo del Servicio con otros actores: convivencia escolar, referentes comunitarios.
9. Articulación del Servicio con el inter sector.
10. Definición de los contenidos mínimos de una política de intersectorialidad : Es decir, de las prestaciones que se encuentren disponibles para la protección de la niñez y a sus familias, entre ellas: prevención del abuso sexual intra y extra residencial, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente; prevención de las drogodependencias y la medicación no regulada en las residencias; de prevención del maltrato y la violencia ; en salud , abrir y financiar líneas especiales de atención psiquiátrica infantil y camas de internación psiquiátrica; y formar especialistas en la materia; reinserción y nivelación escolar; becas de estudio; acceso a capacitación e inserción laboral; subsidios para viviendas o para mejoramiento de éstas tanto para familias como para egresados de la residencias, práctica del deporte, juego, recreación y cultura; espacios comunitarios seguros.

2. MATERIAS REGULADAS EN EL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS QUE HAN DE INCLUIRSE TAMBIÉN EN PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN POR SER ESENCIALES A ÉL

Normas Preliminares:

1. Concepto de Protección Especial Administrativa.
2. Definición de Provisión; Intervención; Restitución como ejes y contenidos de protección propias del Servicio y precisión clara de las autoridades y servicios encargados.

Organización:

3. Entregar la fiscalización a cargo de la Subsecretaría. Ejecutivo propone “intensificarla, no trasladarla”.

4. Incluir funciones básicas sobre Oficinas Locales de la Niñez. Agregar un artículo con las funciones específicas de las Oficinas locales de la Niñez en cada comuna. Estas no pueden ser unas simples continuadoras de las actuales OPD, a las que se les entrega muchos recursos, vías a lo menos 2 glosas diferentes (Programas de seguridad 24 horas y Oficinas de Protección de Derechos propiamente tales)), y no prestan una función clara ni eficiente. La nueva definición de estas ha de incluir mínimo:

- 1) La coordinación con el inter sector
 - 2) La coordinación con directores y personal de ocas
 - 3) La coordinación con los Tribunales, Fiscalía Defensoría y Policías
 - 4) La escucha y recepción de NNA
 - 5) La mediación de conflictos familiares
 - 6) La gestión de casos
 - 7) El seguimiento
 - 8) La coordinación con las escuelas, los consultorios de salud y juntas de vecinos
 - 9) La coordinación con empresas y organizaciones sociales del sector
 - 10) La consulta informática directa al sistema de parte de los interesados, etc.
5. Delegados Comunales del Servicio dependientes de las direcciones regionales.

Debido a la falta de dispositivos territoriales en este PL que aseguren que el Servicio tendrá presencia en los territorios donde los niños se encuentran y que sean conocedores de las particularidades de los entornos en los que ellos viven, se recomienda generar delegados locales del servicio que en conjunto con las Oficinas locales den soporte y coordinación territorial al servicio y a la ejecución efectiva de su función. Ellos serán los encargados de la gestión comunal del servicio en el territorio, los que coordinen los servicios del inter sector y del servicio, tanto en sus prestaciones directas como en la que ejecutan las Ocas; con los tribunales, las familias y los NNA; los municipios, las escuelas y consultorios; los que insumen información local al sistema interconectado; etc.

6. Deber de coordinación en la protección administrativa (Servicio /Ocas/Familias/Justicia.

Funciones del Servicio

7. Las funciones de coordinación del Servicio con Ocas, Oficinas Locales Niñez, inter sector, municipios, tribunales, escuelas etc. han de quedar claras, explícitas y ser vinculantes.
8. Tratándose de la oferta programática de familias de acogida, en especial tratándose de familias de emergencia, el Servicio implementará un sistema de información en línea y actualizado, que pueda ser consultado permanentemente por los jueces de turno de los Tribunales de Familia (en días y horas inhábiles)
9. La Corte Suprema de Justicia, enviará semestralmente un informe, por regiones, de la oferta requerida por los Tribunales de Familia.
10. En relación a capacitaciones periódicas, realizar programas de autocuidado para el personal que se desempeñe en el cuidado directo de niños, niñas y adolescentes.
11. Incorporar supervisión clínica especializada frente a situaciones de intervención específicas y particularmente complejas

Funciones del Director Nacional.

11. La función de evaluar ha de incluir la pertinencia, adecuación y calidad de los programas.
12. Coordinar el trabajo de la Dirección Nacional con el Poder Judicial, y los demás órganos competentes, en el cumplimiento de sus funciones.

Funciones de los Directores Regionales.

13. Coordinar el trabajo de la Dirección Regional *con los Tribunales de Familia de la región y las oficinas locales administrativas de protección.*
14. Estimar la demanda de protección especializada y determinar la falta de oferta, *en coordinación con los Tribunales de familia de la región.*
15. Establecer un dispositivo de información permanente las 24 horas del día respecto de la disponibilidad de acogimientos familiares de emergencia, a disposición de los jueces de familia de turno.

16. Solicitar y evaluar las propuestas que realicen los Delegados Comunales y las oficinas locales administrativa de protección, respecto a los requerimientos propios de cada territorio y proponer al director nacional la elaboración de programas que se ajusten a las necesidades particulares de cada localidad en la región. (Nueva)

3. MATERIAS PROPIAS DEL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN ÉL, SIENDO ESENCIALES, Y QUE NO CORRESPONDE DESPLAZAR SU REGULACIÓN AL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS, POR NO SER MATERIAS DE DICHO PROYECTO DE LEY. SE REQUIERE DE SU REGULACION EN EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO

1. Límite entre Protección Especializada Administrativa y Protección Especializada Judicial. O como mínimo, criterios objetivos que determinen el ingreso de casos al sistema administrativo (Servicio/ Ocas e Inter sector) o su derivación al sistema judicial. El PL sólo menciona el caso de la separación de los NNA de sus padres como exclusivo del Poder Judicial.
2. Caracterización del sistema de protección administrativo o protección especializada administrativa (Servicio/ Ocas e Inter sector): voluntario, colaborativo, respetuosos de los derechos de los niños y las familias.
3. Deber de coordinación en la protección administrativa (Servicio /Ocas/Familias/Justicia
4. Enfoques sistémico e integral, entendiendo al niño, niña o adolescente como sujeto especial de derechos, en su singularidad y en el contexto de su entorno familiar, escolar, social y comunitario.
5. Sistema de alerta temprana y conexión e interacción con el Servicio.
6. Incorporar como principios rectores de la Protección Especializada Administrativa (Servicio y las Ocas):
 - 1) El principio pro-persona.
 - 2) La integralidad y la articulación sistémica
 - 3) La prioridad en la protección social
 - 4) La Interculturalidad
 - 5) La Inclusión
 - 6) La Accesibilidad

- 7) Vida familiar
- 8) Vida libre de violencia, con referencia específica a la no violencia dentro del sistema.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

De la Organización:

7. Exigencia de profesionales especialistas en necesidades y/o derechos de la infancia en las direcciones y jefaturas de las áreas de diseño, evaluación de la oferta programática, planificación y control de gestión del Servicio.
8. Modificar la Unidad de Estudios instalada en la Dirección Nacional, en una unidad de sistematización, reflexión y producción de aprendizajes y conocimiento integrado, que habrá de existir en la Dirección Nacional y en cada Dirección Regional, que desarrolle esa función estratégica para lograr la mejora continua y la gestión de calidad que se proyecta. Las mismas también deben existir en la Oficinas Locales de Protección, y debe recibir insumos de los colaboradores acreditados, de los delegados comunales, sociedad civil y académicos.
9. Subdirectores Especiales:
 - 1) De Planes y Programas de Protección Especial encargado del diseño y programación de la oferta;
 - 2) De Derechos de la Niñez encargado de la promoción, capacitación, supervisión y fiscalización del respeto de ellos al interior del sistema en todo centro y programa, por cada funcionario y autoridad;
 - 3) De Calidad del Servicio, que será el encargado de llevar adelante la mejora continua a partir del trabajo de las Unidades de Conocimiento y Aprendizaje.
10. Especialización de los Recursos Humanos: Deben establecerse en la ley mínimos requisitos de especialización para, al menos, las autoridades más relevantes del Servicio. Eso se hace en toda ley orgánica, sin perjuicio de que luego en los concursos se establezcan los perfiles de los cargos.
 - 1) Los directores nacionales y regionales deben tener formación en infancia o reconocida trayectoria de trabajo con la niñez
 - 2) Los subdirectores deben tener formación especial en Infancia y en área para el cual son nombrados
 - 3) Los delegados comunales deben tener formación en infancia o reconocida trayectoria de trabajo con la niñez, y formación en mediación de conflictos o trabajo colaborativo

- 4) Los jefes de las unidades de conocimiento y aprendizaje colaborativo deben ser profesionales con capacidad de estudio, análisis, procesos colaborativos, habilidades mediadoras, y comunicativas.

Funciones del Servicio

11. Los directores regionales deberán proponer programas de protección especializada atendiendo a las necesidades y especificidades de cada territorio al Director Nacional del Servicio, que deben ser aprobados por el Consejo de Expertos, oyendo al Defensor de la Niñez.
12. Explicitar que los programas de protección especializada, en todo caso, se realizarán directamente en todos aquellos lugares en los que no exista o no sea suficiente la oferta que ejecuten los organismos colaboradores acreditados.
13. Explicitar que la normativa técnica y administrativa de cada programa de protección especializada deberá ajustarse, mínimo, a los estándares -que ya forman parte del PL y existen en la ley de subvenciones: “los artículos 4° y 19° de la presente ley, artículos 2¹ y 25 letras a, b y c² de la Ley N° 20.032, que establece el sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención, y no sólo al “reglamento que, conforme a tales artículos, dicte el Ministerio de Desarrollo Social según lo establece el artículo 3 ter de la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social”.

14. Sistema integrado de información:

¹ Artículo 2°.- La acción del SENAME y sus colaboradores acreditados se sujetará a los siguientes principios:

1) El respeto, la promoción, la reparación y la protección de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y las leyes dictadas conforme a ellos, asegurando las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de sus derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.

2) La promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria del niño, niña o adolescente y su participación social.

3) La profundización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, regionales y municipales, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia.

4) La transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, el SENAME deberá supervigilar, fiscalizar y evaluar periódicamente la ejecución y resultado de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, y en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.

5) La probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan. Todo directivo, profesional y persona que se desempeñe en organismos colaboradores deberá observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones con preeminencia del interés general sobre el particular.

Los recursos públicos que se reciban por concepto de subvención deberán ser depositados y administrados en la forma que determine el reglamento.

6) Responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan. Las personas jurídicas que se desempeñen como organismos colaboradores del Estado serán civilmente responsables por los daños, judicialmente determinados, que se hayan ocasionado a raíz de vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes causados tanto por hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por los mismos hechos pueda corresponderle a la persona natural que ejecutó los hechos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a las personas naturales que se desempeñen como colaboradores acreditados.

Sin perjuicio de ello, el Estado velará por el acceso oportuno y preferente a los servicios sanitarios y de rehabilitación de la salud disponibles en el Estado, para los niños revictimizados dentro del sistema nacional de protección.

² “a) La idoneidad, oportunidad y calidad de la propuesta técnica de intervención orientada a la reparación y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

b) La propuesta de gestión de redes para el acceso oportuno a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes.

c) En el caso de centros de residencias, se incluirán las acciones tendientes a la revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar”.

- 1) Deberá encontrarse siempre actualizado y será interoperable tanto con el Sistema Informático de Tribunales de Familia o SITFA como con los de los ministerios y organismos públicos que corresponda. No sólo con el Registro Civil como lo ha recogido el Ejecutivo.
 - 2) En el registro individual de protección de cada niño debe constar , con el debido resguardo de los datos de carácter personal y sensibles, la información completa que permita efectivamente el monitoreo de casos, y evite la sobre intervención: Así debe incluir el plan de intervención individual correspondiente a cada uno de ellos, las coordinaciones intersectoriales ejecutadas, los plazos establecidos para cada una de las etapas, los profesionales responsables de cada una de las etapas de la intervención , las prestaciones de protección especializada efectivamente recibidas y sus resultados, el responsable legal del organismo executor de la o las prestaciones, el consentimiento informado firmado por los cuidadores del niño, niña o adolescente, en caso de intervención voluntaria, o la copia de la o las resoluciones judiciales que establecen las medidas de protección correspondientes y su plazo de duración , así como las que periódicamente se dicten en las audiencias de control y seguimiento de tales medidas.
 - 3) El plan de intervención, a su vez, debe contener: “los objetivos a corto, mediano y largo plazo trazados en las intervenciones con los niños niñas y adolescentes y sus familias, cuando fuere el caso, para cumplir con la medida de protección; el grado de evolución de los mismos y de las prestaciones intersectoriales planificadas, y las propuestas necesarias para alcanzar el óptimo cumplimiento de las medidas de protección acordadas o decretadas.”
15. Incorporar que la asistencia técnica también sea ejecutada a consideración del propio servicio en virtud del resultado de procesos de supervisión. Esto haría coherente el principio de mejora continua, propuesta en el artículo 18 bis.
16. Nuevas funciones:
- 1) Supervisar y fiscalizar el respeto de los derechos fundamentales de los NNA, en especial de aquellos que se encuentran acogidos en una modalidad de cuidado alternativo, así como los derechos de sus familias dentro del sistema.
 - 2) Recabar, anualmente, la opinión de sus familias. Y en particular, la de las madres que en virtud de una medida de protección han sido privados temporalmente de su derecho a cuidar a sus hijos y/ o su derecho a mantener contacto directo y regular con los mismos. Como una forma de prevenir discriminaciones de mujeres pobres.

- 3) Explicitar como deber celebrar convenios con la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de DDHH a fin de que ambos organismos planifiquen y ejecuten autónomamente programas regionales periódicos de supervisión, fiscalización y evaluación en los diferentes componentes del sistema. Como forma de aumentar el control externo
 - 4) Incorporar una función de monitoreo de los programas.
 - 5) Incorporar supervisión clínica especializada frente a situaciones de intervención específicas y particularmente complejas, que requieran de un apoyo y reforzamiento especializado desde el Servicio.
17. Todas las funciones del servicio deben tener un correlato en las funciones específicas del Director Nacional y los Directores Regionales.

Funciones del Director Nacional.

18. Explicitar que en su función de velar por el cumplimiento de la normativa, lo hará, “especialmente de los principios y estándares esenciales del sistema de protección establecidos en los artículos 4° y 19° de la presente ley, los artículos 2 y 25 letras a, b y c de la Ley N ° 20.032, que establece el sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención, y el reglamento que , conforme a tales normas, dicte el Ministerio de Desarrollo Social según lo establece el artículo 3 ter de la ley N ° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social”.
19. La función de Instruir a las Direcciones Regionales del Servicio debe abarcar a las Oficinas locales administrativas de protección en coordinación con la Subsecretaría.
20. Rendir cuenta pública, en especial de los resultados de las fiscalización y evaluación anual de respeto de los derechos humanos.
21. Campañas de captación y reclutamiento, formación y capacitación en otras líneas de acción o programas: parentalidad positiva, mediación de conflictos familiares, atención psiquiátrica infantil, programas de desintoxicación y rehabilitación de consumo problemático de alcohol y drogas, capacitación laboral.
22. Nuevas:

- 1) Coordinar el trabajo de la Dirección Nacional con el Poder Judicial, y los demás órganos competentes, en el cumplimiento de sus funciones.
- 2) Supervisar y fiscalizar el respeto de los derechos fundamentales de los NNA en especial de aquellos que se encuentran acogidos en una modalidad de cuidado alternativo, así como los derechos de sus familias.

Funciones de los Directores Regionales.

23. Coordinar el trabajo de la Dirección Regional con los Tribunales de Familia de la región y las oficinas locales administrativas de protección.
24. Estimar la demanda de protección especializada y determinar la falta de oferta, en coordinación con los Tribunales de familia de la región.
25. Establecer un dispositivo de información permanente las 24 horas del día respecto de la disponibilidad de acogimientos familiares de emergencia, a disposición de los jueces de familia de turno.
26. Campañas de captación y reclutamiento, formación y capacitación en otras líneas de acción o programas: parentalidad positiva, mediación de conflictos familiares, atención psiquiátrica infantil, programas de desintoxicación y rehabilitación de consumo problemático de alcohol y drogas, capacitación laboral.
27. Nuevas:
 - 1) Solicitar y evaluar las propuestas que realicen los Delegados Comunales y las oficinas locales administrativa de protección, respecto a los requerimientos propios de cada territorio y proponer al director nacional la elaboración de programas que se ajusten a las necesidades particulares de cada localidad en la región.
 - 2) Supervisar, fiscalizar y evaluar el respeto de los derechos fundamentales de NNA, en especial de aquellos que se encuentran acogidos en una modalidad de cuidado alternativo.

Consejo de Expertos

28. Asesor en la confección de normativas y regulaciones internas, protocolos y procedimientos de actuación requeridos de validación externos, por ejemplo, para la manipulación de alimentos, para enfrentar situaciones de emergencia, aplicación de sistemas de contención emocional de NNA, manejo de crisis; administración y manejo de medicamentos; prevención del abuso sexual intra residencial, etc.

29. Evaluar las propuestas de Programas que envíen de los Directores Regionales y las oficinas Locales.
30. Incluir dos médicos psiquiatras infanto-juveniles y un psicólogo, en vez de 2 profesionales de la salud.
31. A los miembros del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez - que eligen miembros del consejo de expertos- les afectarán las mismas inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 12 de la presente ley.
32. Posibilidad de que esta instancia pueda autoconvocarse, en casos urgentes por decisión mayoritaria.
33. De la priorización: Se solicita proponer un mecanismo de gestión de casos que otorgue más garantías de atención y de efectiva priorización, sobre todo respecto de los lugares de Chile con menos cobertura de servicios. *Ejecutivo acoge idea de Responsabilidad en la priorización, pero no queda claro el significado de ello.*

Comisión Coordinadora de Protección.

34. Incluir al Ministerio de Hacienda.
35. Precisar que responde a los lineamientos dictados por la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia, en los objetivos, actividades, metas e indicadores fijadas por éstas.
36. Disponer la posibilidad que esta instancia se pueda autoconvocar.
37. Explicitar la posibilidad de crear mesas especializadas de coordinación intersectorial, que requieran la integración de servicios por área.

TÍTULO III

DE LA PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

38. Derechos de las familias y/o cuidadores de los niños dentro de ese sistema de protección especializada:
en particular, el derecho a conocer las acciones de protección y los planes de intervención que se realizarán, a participar en ellos, a ser oídos, a mantener contacto directo y regular con sus hijos, salvo decisión judicial en contrario, y a recibir en todo momento, un trato digno y no discriminatorio, por parte de

todo funcionario y profesional que se desempeñen en atención a la niñez y los colaboradores acreditados; y el derecho a reclamar de las decisiones administrativas que les afecten.

Líneas y Programas

39. Definir adecuadamente que implica cada línea: pues entre una y otra se entremezclan los conceptos, y se confunden.
40. Establecer bien claras y precisas las líneas de acción y asociar a ellas los programas esenciales que deben conllevar: se sugiere diferencias entre 1) Evaluaciones y pericias 2) Intervenciones de Reparación y Restitución Simples 3) Intervenciones de Reparaciones y Restitución Complejas: dentro de ellas, el Acogimiento alternativo, la Preparación para la Vida Independiente y el Apoyo a la Vida Autónoma 4) Trabajo con las Familias, Revinculación y Reintegración familiar.
41. Se debe definir el Diagnóstico como una actividad científica, de carácter personal e, intransferible, libre de toda clase de sesgos y opiniones personales, fundado en evidencia contrastable y defendible, coherente y argumentable, y con sustento teórico.
42. Se debe precisar y nutrir mejor la línea de trabajo con la familia porque luego los programas son precarios y poco eficientes. Incluir programas de:
 - 1) Mediación de conflictos,
 - 2) Habilidades comunicativas para padres e hijos.
 - 3) Parentalidad Positiva.
 - 4) Capacitación laboral
 - 5) Gestión de mejoramiento de la habitabilidad y calidad de vida para la familia.

Me dirán que eso corresponde al inter sector pero lo cierto es que se requiere de personas capacitadas y con experiencia que amplíen la oferta nacional de los servicios públicos que es escasa o nula en algunos lugares.
43. Redefinir la atención de los niños que incurren en conductas contrarias a ley. No son un grupo “especial” o “aparte” son niños, con vulneraciones graves y complejas, requeridos de intervenciones compuestas e integrales.
44. Definición de intervenciones de carácter complejo, multifactoriales y por ende multi prestacionales: atención a los niños en situación de calle, niños infractores, etc. que requerirán intervenciones sistémicas y prestaciones intersectoriales.

45. Dentro de la línea de cuidados alternativos se debe ampliar y financiar ostensiblemente las familias de acogida de emergencia y las especializadas en niños de 0 a 3 años en todo Chile; se debe crear un programa de apoyo financiero a la familia extensa que funja como acogedora de nietos, sobrinos, etc.
46. Quienes ejerzan la responsabilidad legal de cuidador alternativo deben ser personas con un buen conocimiento de los problemas que afectan a la infancia, con aptitud para trabajar directamente con niños y una buena comprensión de las necesidades culturales y especiales de los niños que se les hayan de confiar. Y con responsabilidades específicas:
- 1) Velar por la protección de los derechos del niño y, en especial por que el niño cuente con el cuidado, el alojamiento, la atención de salud, las oportunidades de desarrollo, el apoyo psicosocial, la educación y el apoyo lingüístico apropiados;
 - 2) Velar por que el niño tenga acceso a representación legal y otro tipo de asistencia si fuera necesario, por que el niño sea oído, de modo que sus opiniones sean tenidas en cuenta por las autoridades encargadas de la toma de decisiones, y porque el niño sea informado y asesorado sobre sus derechos;
 - 3) Contribuir a la determinación de una solución estable que responda al interés superior del niño;
 - 4) Servir de enlace entre el niño y las diversas organizaciones que pueden prestar servicios a este;
 - 5) Ayudar al niño a mantenerse en contacto con su familia, cuando proceda.
47. Se deben financiar residencias especializadas en niños con discapacidades mentales y físicas severas, al menos una por región.
48. Información obligatoria de los Registros Individuales de los niños. En el registro individual de protección de cada niño debe constar , con el debido resguardo de los datos de carácter personal y sensibles, la información completa que permita efectivamente el monitoreo de casos, y evite la sobre intervención: Así debe incluir el plan de intervención individual correspondiente a cada uno de ellos, las coordinaciones intersectoriales ejecutadas, los plazos establecidos para cada una de las etapas, los profesionales responsables de cada una de las etapas de la intervención , las prestaciones de protección especializada efectivamente recibidas y sus resultados, el responsable legal del organismo ejecutor de la o las prestaciones, el consentimiento informado firmado por los cuidadores del niño, niña o adolescente, en caso de intervención voluntaria, o la copia de la o las resoluciones judiciales que establecen las medidas de protección correspondientes y su plazo de duración , así como las que

periódicamente se dicten en las audiencias de control y seguimiento de tales medidas.

49. Contenidos Esenciales de los Planes de Intervención para asegurar intervención de calidad, y el seguimiento eficiente de los procesos: y El plan de intervención, a su vez, debe contener: “los objetivos a corto, mediano y largo plazo trazados en las intervenciones con los niños niñas y adolescentes y sus familias, cuando fuere el caso, para cumplir con la medida de protección; el grado de evolución de los mismos y de las prestaciones intersectoriales planificadas, y las propuestas necesarias para alcanzar el óptimo cumplimiento de las medidas de protección acordadas o decretadas.”
50. Ejecución individual diferenciada. Los programas se ejecutarán atendiendo a la singularidad de cada NNA y considerándolo en toda su complejidad. Cada plan individual de intervención debe ser diseñado en forma personalizada, especificando los aspectos característicos y diferenciados de las acciones a desarrollar; el o los vínculos afectivos que debe desarrollarse como elemento central y básico en la intervención, y los aspectos del trabajo que se ejecutarán de modo compartido y coordinado con la red interventora, adultos significativos, pares; y el órgano judicial de ser el caso.
51. Durante todo el período de acogida, los centros y las familias de acogida deben fijarse sistemáticamente como objetivo la preparación del niño para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su preparación para la vida cotidiana y el trato social, que se fomenta mediante la participación en la vida de la comunidad local.
52. Los centros de acogida deberán velar sistemáticamente por que, antes de su contratación, los cuidadores y otro personal en contacto directo con los niños fueran objeto de una evaluación completa y apropiada de su idoneidad para trabajar con niños.
53. Las condiciones laborales, incluida la remuneración, de los cuidadores contratados deberán ser tales que fomenten al máximo su motivación, satisfacción y continuidad en el trabajo, y por tanto su disposición para cumplir su función de la forma más apropiada y eficaz.
54. Las residencias y encargados de familias de acogida deben brindar a todos los cuidadores capacitación sobre los derechos de los niños sin cuidado parental y sobre la vulnerabilidad especial de los niños que se encuentran en situaciones particularmente difíciles, como el acogimiento de emergencia y el acogimiento fuera de su zona de residencia habitual; de cómo hacer frente a los comportamientos problemáticos, incluidas las técnicas de solución de

conflictos y los medios para prevenir los actos de los niños que puedan causar daños a sí mismos o a terceros; y para atender a los niños con necesidades especiales, principalmente aquellos que viven con el VIH/SIDA o padecen otras enfermedades físicas o mentales crónicas, y los niños con discapacidades físicas o mentales.

55. Debe definirse los contenidos mínimos de una política de intersectorialidad para que las prestaciones se encuentren disponibles para la protección de la niñez y a sus familias, entre ellas: prevención del abuso sexual intra y extra residencial, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente; prevención de las drogodependencias y la medicación no regulada en las residencias; de prevención del maltrato y la violencia ; en salud ,se deben abrir y financiar líneas especiales de atención psiquiátrica infantil y camas de internación psiquiátrica; y formar especialistas en la materia; la reinserción y nivelación escolar; la capacitación laboral; práctica del deporte, juego, recreación y cultura.
56. Determinación de criterio de aplicación de las sanciones que establece el PL: Se definen las sanciones pero no criterios no generales ni específicos acerca de cuales corresponden a Infracciones gravísimas, graves, leves.
57. Definir en términos generales y con referencia a ley de Ocas, cuáles infracciones son de carácter gravísimas, graves, leves. Relacionar esa intensidad de las infracciones con las posibles atenuantes y agravantes que se establecen. Referir las hipótesis de infracciones graves y gravísimas -como la vulneración de derechos de los niños- que ya fueron reguladas en ley de Ocas. En definitiva, se requiere sistematización para armonización de las normas sobre infracciones en el PL del Servicio - incluyendo las que se contienen en la ley de Ocas.

II. MINUTA SOBRE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE MENORES EN MATERIA DE REVISIÓN PERIÓDICA DE LA MEDIDA DE INTERNACIÓN EN RESIDENCIAS. Boletín 11844-07

Este senado necesita dar señales claras de que efectivamente nos importan los niños más vulnerables del país, que se encuentran al cuidado del Estado por carecer de un cuidado parental adecuado a sus necesidades.

No basta con hacer declaraciones acerca de la pre- ocupación que por ellos tenemos, sino que debemos ocuparnos de ellos.

En lo inmediato, no podemos resolver todos los problemas de fondo que llevan a que nuestros niños más vulnerables sean separados de sus padres e ingresados a un centro del Sename.

Pero sí podemos aunar voluntades para que, en el más breve plazo, TODOS LOS ADULTOS INVOLUCRADOS: Jueces/Directores de Residencia, Profesionales que los atienden y legisladores, CONCRETEMOS ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR SU CUIDADO Y A PREVENIR VULNERACIONES ESTANDO AL CUIDADO DEL ESTADO

ESTE PL ES UN APOORTE PARA LOGRAR QUE DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN CHILE SE MEJOREN LOS ESTÁNDARES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUS VIDAS EN LOS CENTROS

1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la legislación actual establece que las medidas de internación de niños en residencias deben ser revisadas por el juez cada 6 meses.

La duración máxima de una medida de protección es de un año. Sin perjuicio de que pueda ser renovada por igual plazo, si subsiste la casual que le dio origen.

Eso significa que un niño, niña o adolescente, incluido los bebés de 0 a 3 años, pueden ser encerrados en residencias como una forma de cuidado -criterio que no comparto “ENCERRAR NO ES CUIDAR”- y su situación al interior de la residencia no será revisada por el juez más que una vez mientras dure su internación. Al término de ese plazo, se egresará al niño, sino se renueva la medida. Y esa será la otra oportunidad en la que se citará a una audiencia para ver el caso del niño.

Resulta evidente que un niño no puede estar en esa situación de alta vulnerabilidad hasta por 2 años- en circunstancias que su internación debe realizarse por el menor tiempo posible, y encima, que estando allí, apartado de su familia y su comunidad, el Estado no se ocupe de controlar su situación más que 2 veces, ni sus cuidadores de dar cuenta de su trabajo apenas una vez por el lapso del encierro.

Por ello , la primera modificación que se propone es acortar a tres meses el plazo de revisión de la medida, de modo que al menos 4 veces al año el juez deberá pedir cuenta a los cuidadores de la situación del niño y del avance de cumplimiento de las tareas que se ordenaron para su protección.

2. En segundo lugar: Es necesario aclarar que actualmente la revisión de la situación del niño se efectúa:

- a) En base a informes escritos, cuyo contenido es definido por los mismos entes cuidadores y no pocas veces, obedecen a un formato tipo que no da cuenta de la singularidad de cada niño, y no aportan pruebas científicas u objetivas de sus afirmaciones.
- b) No necesariamente en audiencias de revisión de medidas (Centro de Medidas Cautelares de Santiago , por ejemplo)
- c) En caso de realizarse audiencias, éstas se realizan sin presencia de la familia de los niños, sin el niño, y sin la asistencia de un abogado del niño.
- d) Tampoco asisten a dichas audiencias de revisión, los profesionales que realizan esos informes, a dar cuenta y explicar los mismos al Tribunal, ni mucho menos los representantes del Centro Residencial en el que los niños se encuentran, no obstante que -por ley- son los que tienen el cuidado legal de ellos.
- e) De este modo, se realiza un audiencia , un juicio, en la que se decide el curso de su protección, el posible regreso con su familia, o la continuación de su encierro, sin que se respeten los mínimos requisitos de un debido proceso: No asiste ni es representado el sujeto de protección ; no asisten sus padres ni familiares los que muchas veces se encuentran cumpliendo terapias o trabajos ordenados por el Tribunal, y estar interesados en recuperar su cuidado; y por lo mismo , ellos no pueden aportar prueba alguna , ni se cumple con la contradictoriedad del juicio.

Por ello, el PL propone incorporar **los estándares mínimos de un debido proceso** que además **garanticen los mínimos derechos de los NNA** cuya vida ha sido intervenida por el Estado para su protección. A saber:

- 1. Que la revisión de su estado se realice en una audiencia especialmente decretada al efecto, evitando de esa forma que el tribunal, tal como ocurre en la actualidad, sólo se imponga de la situación de los niños a través de los informes que envían los establecimientos que tienen bajo su cuidado a los menores.
- 2. Que a ella, deban comparecer obligatoriamente el director de la residencia respectiva, o su representante especialmente mandatado al efecto, junto al profesional responsable de la intervención; el padre y la madre del niño

y, en ausencia de éstos, los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado.

3. Que el niño sujeto del juicio afecto siempre pueda ser oído, debiendo el juez informarle de su derecho a ser escuchado privadamente por el magistrado.
4. Que, en caso de manifestar su voluntad de concurrir a la citada audiencia especial, el NNA expresé sus planteamientos asistido de un representante letrado, en una sala especialmente acondicionada para ello, con los implementos adecuados en atención a su edad y a su etapa evolutiva, la que deberá reunir las condiciones previstas en el artículo 21 de la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales.
5. Que se cumpla con objetivos mínimos para la revisión que se realizará, de modo que el objeto de la audiencia especial de revisión de la internación obligue a revisar cada tres meses, 3 contenidos esenciales :
 - a) El estado de salud físico y psicológico del niño, niña o adolescente, avalados por los respectivos certificados actualizados.
 - b) El plan individual de protección diseñado y aplicado al niño, niña o adolescente y su estado de avance.
 - c) Los planes de acción con la familia de origen o extendida, destinados a superar las dificultades de cuidado, junto a su posibilidad de revinculación.”

El país necesita dar señales claras de que efectivamente nos importan los niños más vulnerables del país, por tanto, voto a favor de su aprobación en particular.

III.MINUTA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. BOLETÍN N ° 8.970-06

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que potencie las ventajas que representa para el país la migración internacional, sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes, y fortalezca el

vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior. Asimismo, busca modernizar la normativa migratoria vigente, orientándola hacia un modelo de migración segura, ordenada y regular.

II. ACUERDO: aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 175 artículos permanentes y de 9 disposiciones transitorias.

IV. URGENCIA: suma.

V. NORMAS CON QUÓRUM ESPECIAL: el artículo 141 del proyecto de ley debe ser aprobado como norma de rango orgánico constitucional, porque establece una nueva obligación para los tribunales de justicia, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, el artículo 160 debe serlo como norma de quórum calificado, por cuanto crea el Registro Nacional de Extranjeros cuya información es de carácter reservado, en virtud del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: aprobado en general por 147 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: la Sala dio cuenta dio cuenta de esta iniciativa el 16 de enero de 2019 y dispuso que el proyecto sea informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y por la de Hacienda en su caso. El 20 de marzo de 2019, la Sala del Senado acordó que el proyecto también sea informado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

No cabe duda que el país requiere un cambio en la legislación inmigratoria.

Existe acuerdo en que el proceso migratorio debe ser ordenado. También, que debe velar por la seguridad, en un sentido amplio, tanto para Chile (como sociedad receptora) como para los propios migrantes (objetos de redes de tráfico de personas y de explotación laboral). Por ello, se respaldan aquellas medidas que buscan restringir el ingreso de personas con antecedentes penales o la permanencia de quienes cometen delitos en el país.

El proyecto de ley establece principios que orientan el actuar del Estado y derechos y obligaciones de los inmigrantes que representan el marco en el que se desenvolvería la acción del Estado frente a la inmigración: principios relativos al

interés superior del niño, niña o adolescente (art 4°), procedimiento migratorio informado (art 5°) y no criminalización de la migración (art 9°), derechos laborales (art 14) y sociales,

Se destaca el significativo avance en esta materia, respecto de la actual Ley de Extranjería.

No obstante, el detalle de las normas propuestas, no refleja un respeto irrestricto a las garantías fundamentales:

1. Existe un exceso de atribuciones del Ejecutivo para determinar los casos en los que procederá la permanencia transitoria y residencias temporales, materias que, además, se encuentran remitidas a la potestad reglamentaria, vía resoluciones exentas. Los plazos y condiciones, y por ende, el derecho a trabajar, derecho a solicitar otra residencia o la residencia definitiva que ellas implican, deben estar establecidos en la ley y no quedar entregados a los cambios reglamentarios que los gobiernos puedan realizar.
2. En relación con el sistema de visas, el artículo 56 del PL prohíbe el cambio de categoría migratoria y obliga a realizar este trámite en el extranjero por la vía consular. Ello, generará un incremento de la migración irregular, especialmente de los grupos más vulnerables. Es imprescindible, por ello, la creación de una categoría de ingreso al país que permita la búsqueda de trabajo, con sistema simples de tramitación, de manera de transparentar y gestionar mejor la situación que hoy se produce.
3. En cuanto a la tramitación, se debe avanzar en sistemas digitales de tramitación de las residencias, con mínimos trámites presenciales. Además de ser indignas las largas esperas en filas interminables, se alargan en exceso los distintos trámites son excesivos.
4. Los largos plazos de tramitación generan una vulneración de derechos por la imposibilidad de las personas migrantes de acceder a políticas públicas, así como a trabajos formales, lo que promueve la precarización laboral y sus derivados. Por ello, es necesario regular una tramitación sumaria para ciertos casos, como el de las mujeres embarazadas y el de los niños niñas y adolescentes.
5. En lo relativo a las causales de rechazo y revocación de los permisos de residencia, no existe pleno respeto del derecho a un debido proceso. no se establecen garantías efectivas de bilateralidad de la audiencia; presunción de inocencia, no existe un acceso al reclamo, y se limita el acceso a los recursos y acciones de reclamación contra las medidas de expulsión respecto de los migrantes que se encuentren en Chile.

6. Es necesario que el Concejo de Política Migratoria posea una perspectiva integral del proceso migratorio, toda vez que el PL no considera siquiera un programa de desarrollo de inclusión y de integración de los migrantes, que sería lo propio de una ley de migración: Los hombres, mujeres y niños migrantes no son protegidos frente a las múltiples formas de discriminación y de vulneraciones a que son expuestos. Si realmente se desea abordar la situación de los inmigrantes en nuestro país, en el Concejo han de integrarse ministerios como Trabajo, Desarrollo social, Vivienda y Salud, Mujer y Equidad de Género, como mínimo.
7. El gobierno dice estar empeñado en combatir la violencia contra la mujer, sin embargo, no existe en el PL enfoque de género alguno: omite medidas de protección para las mujeres migrantes especialmente vulnerables y en situación migratoria irregular. Urge el establecimiento de una visa de residencia temporaria para mujeres embarazadas y para las víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sería un serio retroceso en el resguardo de los derechos de las mujeres, el disponer la entrega de una visa dependiente de la visa de sus agresores.

Es necesario mantener la vigente visa temporal para las mujeres embarazadas y para quienes hayan vivido violencia intrafamiliar. Además, de explicitar su derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia de género, con independencia de su situación migratoria.

8. Con respecto a la niñez, existe ambigüedad:

Las visas preferentes para la regularización de la niñez en situación migratoria irregular existen en Chile desde hace más de una década.

El artículo 41 del PL establece que “la condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente”, pero no le otorga el derecho a obtener residencia temporal.

A, su vez, en el artículo 68 -que señala las subcategorías de residencias temporal que serán reguladas por Decreto- no existe ninguna referencia para incluir visas para grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes.

Omisión que podría generar medidas regresivas respecto de los derechos ya consagrados para quienes tiene derecho a una especial protección. Y debiesen estar primero.

9. En materia de seguridad social y beneficios de cargo fiscal, el artículo 16 del proyecto de ley establece beneficios para los residentes que tengan veinticuatro meses de permanencia continua. Ello es una discriminación y una omisión a las garantías de acceso a políticas sociales a los niños niñas y adolescentes, independientemente de la situación migratoria de sus padres o tutores legales. Eso es mantener la situación actual, que afecta los niños migrantes y a los menores chilenos hijos de migrantes, cuyos adultos responsables se encuentran en situación irregular, quienes no pueden aplicar para su inclusión en el Registro Social de Hogares, debido que se exige permanencia definitiva.

Si los niños están primero, se debe eliminar el requisito de residencia mínima de veinticuatro meses y explicitar las garantías para el acceso igualitario a las políticas de seguridad social en favor de los niños, niñas y adolescentes independientemente de su propia situación migratoria, la de sus padres o tutores legales.

Otra cosa es discriminación arbitraria.

10. En educación, el artículo 17 del proyecto de ley establece la garantía de acceso a la educación, no pudiendo denegarse, ni limitarse por nacionalidad o condición migratoria. Pero, esta garantía se restringe a los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, dejando fuera a todos los establecimientos educacionales particulares. Esto último, puede generar prácticas discriminatorias respecto de los niños, niñas y adolescentes.

También, es discriminatorio el requisito sobre acceso a la gratuidad universitaria de la letra a) del artículo 103 de la ley N ° 21.091, sobre Educación Superior, requisito que exige que se haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

Profundizar el rol que tendrán las casas de estudios en materia de reconocimiento y homologación de títulos de extranjeros, de tal manera de evitar que este beneficio a los migrantes con intenciones de trabajo se convierta en un negocio lucrativo para las casas de estudio.

11. En materia laboral, se observa una falta de voluntad política para regular la migración laboral, su protección social, la no explotación, el trabajo digno. Es imprescindible: Restablecer la residencia temporaria por motivos laborales u otro mecanismo que de una solución efectiva y rápida a la irregularidad migratoria de índole laboral.

Así como el artículo primero transitorio, refiere al aumento del personal de la Subsecretaría del Interior, también debiese aumentar la dotación de

fiscalizadores de la Dirección del Trabajo que son los encargados de comprobar la situación laboral en que se encuentran las personas migrantes.

El proyecto de ley, apenas se ocupa de multar a los empleadores que contraten migrantes irregulares, y ni siquiera establece un mecanismo para la ejecución de las multas a las que se exponen. Es urgente corregir aquello

Todas estas carencias, no hacen más que evidenciar, ahora a nivel nacional, las razones por las que el Gobierno se negó a suscribir el PACTO MIGRATORIO DE LA ONU. Lo mismo que dicho Pacto garantiza a los migrantes es lo que falta en este PL

IV. MINUTA DISCUSIÓN PARTICULAR PROYECTO DE LEY SOBRE ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

BOLETINES REFUNDIDOS N°s 11.750-04 - 11.797-04 Y 11.845-04

FECHA DE INGRESO: 29 de mayo de 2018.

CÁMARA DE ORIGEN: Senado

INICIATIVA: Mociones: 1) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Órdenes, Allende, Provoste y Von Baer y señor Montes, sobre acoso sexual en el ámbito académico (Boletín N° 11.750-04). 2) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Letelier, Lagos y Pizarro, que sanciona el acoso sexual en escenarios educativos (Boletín N° 11.797-04). 3) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Lagos, sobre prevención de la violencia de género y respeto de la diversidad sexual en establecimientos educacionales (Boletín N° 11.845-04).

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: 8 artículos permanentes y una disposición transitoria.

1. La presente ley regula el acoso sexual en el ámbito de la educación superior como una vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien lo sufre. (Artículo 1°)

2. Ámbito académico se define ampliamente como “las actividades desarrolladas u organizadas por cualquier tipo de institución educativa o académica”. (Artículo 2)
3. Cometerá acoso sexual en la educación superior quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de naturaleza sexual, sea para sí o para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales, ejecutadas de manera presencial o virtual. (Artículo 2)
4. El acoso se sancionará se cometa “contra el personal académico y no académico, los estudiantes y a toda persona vinculada, de cualquier forma, con las actividades desarrolladas u organizadas por la respectiva institución de educación superior”. (Artículo 2)
5. “Las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra la violencia de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso sexual, construido con la participación de todos los estamentos existentes a su interior” (Artículo 3°.)
6. Dentro de lo que el PL obliga a incluir dentro del modelo de sanción, destaca:
 - a) Procedimiento de denuncia, investigación y de determinación de acoso sexual, regido por las normas del debido proceso.
 - f) Establecimiento de medidas protectoras de la víctima, tales como, la reubicación del puesto de trabajo, prohibición de contacto directo del denunciado con la denunciante, ajuste de calendario de evaluaciones, extensión de plazos de corrección, reducción de la carga académica, reubicación de curso o sección y suspensión del semestre.
 - l) La duración máxima del procedimiento de seis meses, contados desde la presentación de la denuncia.
 - m) La sanción a las denuncias falsas relativas a hechos inexistentes o infundados, presentadas con ánimo deliberado de perjudicar la imagen y reputación del denunciado.
7. Las instituciones de educación superior deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico, médico y jurídico del o la denunciante y de los miembros de la comunidad por los hechos denunciados. (Artículo 4°)

8. Y deberán evitar la exposición reiterada e injustificada del o la denunciante a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y, realizarán preferentemente entrevistas videograbadas. (Artículo 4°)

Estos son los contenidos esenciales del PL, que ciertamente apoyo.

Pero no puedo dejar de remarcar que es una vergüenza, un escándalo, que recién en el año 2019 estemos intentando poner coto a formas de violencia como éstas.

Es escandaloso que ni siquiera en el ámbito académico, en las universidades, supuestas cunas del pensamiento crítico, y formadora de las mentes que llevan adelante por generaciones la formación de profesionales y científicas del país, se tenga conciencia clara de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres:

Investigadoras, científicas, pensadoras, docentes, directivas, estudiantes, secretarias, funcionarias, han tenido que soportar por años, la humillación, la vejación, de hombres que, a pesar de su formación profesional y su labor académica, no son capaces de comprender a las mujeres que los rodean como una igual, como un ser tan digno de trato y respeto como ellos mismos.

Ello envuelve dos fenómenos que hay que evidenciar: no sólo la violencia contra la mujer, sino que también el abuso de poder,

El Artículo 2° del Código del Trabajo fue modificado en el año 2.005 para sancionar las conductas de acosos sexual:

Se estableció que en las relaciones laborales debe haber un trato compatible digno con las personas. Se estableció que, entre otras conductas, el acoso sexual, es una conducta indigna e injusta.

Se señaló que acoso sexual es “realizar en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”

Este PL, viene a demostrar-vergonzosamente- que el abuso sexual se sigue considerando una conducta normal, al punto que se han presentado para cada ámbito de relación en el que interactúan hombres y mujeres, una iniciativa para volver a prescribir lo indebido e indigno de tal conducta.

**V.MINUTA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y MODIFICA NORMAS
LEGALES QUE INDICA.BOLETÍN N° 12.027-07**

Fecha de ingreso: 17 de agosto de 2018

Urgencia Actual: Suma

Normas de Quórum:

Cámara de Origen: Cámara de Diputados

Iniciativa: Mensaje Presidencial

Etapas: Segundo Trámite Constitucional

Nuestros niños han sido víctimas de un sistema de protección obsoleto.

Como Estado y sociedad les hemos fallado.

El Estado los dejó en el olvido y el abandono.

Nuestros niños, niñas y adolescentes han cargado por décadas con la pesada mochila de la indiferencia y la vejación de sus derechos.

En Chile, ha existido y persiste una cultura que adultocéntrica que considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos, que no considera sus emociones, sentimientos y reales necesidades.

Ha existido y existe, un Sistema que se ocupa más de las estadísticas que de los niños mismos.

Esta invisibilización de los niños, niñas y adolescentes se ha visto agravada por la tolerancia y el amparo que el sistema ha prestado a una serie de prácticas abusivas en contextos residenciales, que han derivado en muertes, abusos y maltratos a nuestros niños y jóvenes.

Hemos tolerado que su cuidado esté a cargo de personas que no cuentan con la preparación suficiente; hemos tolerado que vivan en recintos inseguros; que sean medicados para que simplemente “no molesten”; que sean sexualmente abusados; que no se atiendan sus enfermedades; que no se les entregue una alimentación adecuada; y que no tengan espacio para el juego, el esparcimiento, al deporte y a la cultura.

Todo lo anterior, nos compele éticamente a poner a su servicio una institucionalidad de protección robusta, bien estructurada, que tenga como centro a los niños y prime su vida en familia y comunidad, antes que su encierro. Que no

solo se preocupe de exhibir estadísticas y números, sino que se ocupe del bienestar y desarrollo de niños y niñas concretos y singulares, que escuche sus opiniones y las de sus familias, que no insista en castigar la pobreza, que no separe a los niños de sus familias simplemente porque las carencias impiden a sus padres entregar un cuidado adecuado

Si bien, aprobaré la idea de legislar, existen una serie de elementos que tenemos que redefinir en la discusión en particular.

1. El Proyecto no define claramente la protección que le corresponderá realizar a la Administración y cual le corresponderá al poder judicial. Así seguirán existiendo muchos más casos como el de Yancarla Muñoz Díaz, fallecida a los 16 años, el 30 de junio de junio de 2012, que entró y salió del sistema judicial al sistema de salud infinitas veces sin lograr la debida atención de sus afecciones, falleciendo finalmente por falta de atención.
2. El Proyecto de Ley no define claramente los programas y equipos que estarán a cargo de nuestros niños en los espacios donde viven con sus familias. No sabemos en qué consiste y como operará en el territorio la prevención de las vulneraciones. ¿Seguiremos teniendo entonces internaciones INNECESARIAS de niños a causa de falencias de salud o educación no graves que pudieron corregirse con ayuda oportuna a las familias?
3. El Proyecto de Ley no establece tampoco con precisión las tareas que se le encomendarán a los privados colaboradores, ni la forma en que su labor será fiscalizada. ¿Seguiremos tolerando entonces que se desempeñen de cualquier forma, poniendo nuevamente en riesgo a nuestros niños?
4. No podemos aprobar un Proyecto de Ley que encargue la fiscalización del nuevo Servicio de Protección y sus colaboradores en el mismo servicio. La auto fiscalización es un error que NO podemos volver a cometer. Lissette Villa, de 11 años fallecida en el centro Cread Galvarino de Estación Central, después de que dos educadoras de trato directo en abril del año 2016, la asfixiaran por supuestas maniobras de contención, es un dramático caso que muestra la nula supervisión y fiscalización que el Servicio realiza en sus propios centros de acogida. Ni hablar de la que realizará en los centros de administración privada.

El Proyecto de Ley que hoy se presenta a votación en general establece los siguientes puntos que merecen atención especial:

1. **La Facultad exclusiva de la judicatura para determinar la separación del niño o niña de su familia.** Sin embargo, es necesario, precisar cuáles serían las facultades no exclusivas del Poder Judicial, y que órganos distintos a Tribunales de Familia podrían ejercer esas mismas facultades. ¿Serán las autoridades centrales del Servicio? ¿Un subsecretario (a)? ¿serán autoridades locales? ¿Con cuáles equipos? ¿Con cuál capacitación o especialización? ¿O serán nuevamente organismo privados?
2. **Excepcionalidad de la medida de internación de niños y niñas de 0 a 3 años de edad.** No podemos estar de acuerdo con esta definición. Para dicho rango etario, la internación debe estar prohibida, pues en un año de internación, que es la duración promedio de una medida de protección los bebés pierden 4 meses de desarrollo, RETRASO COGNITIVO y FISICO QUE NO SE RECUPERA. Si no queremos afectar seriamente el desarrollo futuro de los bebés de 0 a 3 años, tenemos que entregar su cuidado a familias de acogida, y no recluirlas en instituciones. La Comisión de Infancia que preside, tramita actualmente un Proyecto en tal sentido y todos los expertos y Magistrado de Familia que han asistido a su tramitación, están contestes en la necesidad de la prohibición. ¡¡No queremos tener más bebés que ingresan al sistema a los 0, 1, 2 o 3 años y egresan a los 18! No podemos castigar a madres solteras como Vanessa de Ancud, que perdió a sus 3 hijas a muy corta edad y aún transcurridos más de 14 años desde su internación aún no las recupera, a pesar de que ella sacó sus estudios hasta 4 medio, estudió secretariado, consiguió trabajo, construyó un baño en su casa que no tenía, y nunca fue ni drogadicta ni alcohólica como se le imputó por una asistente social de un consultorio de salud que solicitó la medida de protección.
3. **El PL mantiene la posibilidad de que las medidas de protección puedan ser ejecutadas por privados**, no obstante que, de acuerdo a las observaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño, que el Informe de la Corte Suprema recoge, corresponde al Estado la implementación y ejecución de las políticas públicas y sociales en materia de niñez. Los particulares, entonces, solo podrían prestar esta labor bajo el entendido que desempeñan una función de interés público con todas las exigencias y responsabilidades que ello demanda.
4. **El PL contempla un Sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo respecto de las prestaciones y el seguimiento de los niños atendidos por el servicio.** La informatización y la interconexión, sin embargo, deben extenderse a los datos y medidas de protección que dictan los tribunales de justicia a favor de los NNA. De modo que la oferta que diseñe el Servicio sea adecuada en tipo y cantidad a las reales necesidades de éstos.

Si bien valoramos varios de estos contenidos, no podemos permitirnos una regulación deficiente, por querer llevar adelante una tramitación acelerada.

Otra cosa, ¡no es poner a los niños primero!

VI. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA S.E EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEÑOR SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE QUE SE SIRVA DISPONER DE INMEDIATO EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRA LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. Y QUE APLIQUE LA SANCIÓN DE CADUCIDAD DE LA MISMA; Y UNA INVESTIGACIÓN ACERCA DEL ROL EJERCIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, LA ONEMI Y LA INTENDENCIA REGIONAL EN ESTE CASO.

Considerando:

1. La ley N° 18.902, de 27 de enero de 1990, dispone en su artículo 1° la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (en adelante, SISS) como un servicio funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, con domicilio en la ciudad de Santiago.
2. Asimismo, el artículo 6° del mismo cuerpo normativo dispone que la SISS, para todos sus efectos legales, se considerará institución fiscalizadora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° del DL N° 3.551 de 1980, que establece que la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan en la actividad.
3. Ahora bien, el jefe superior de este servicio público es el Superintendente de Servicios Sanitarios (artículo 3°), el que cuenta con las funciones y atribuciones que la ley le otorga y las que corresponden a los jefes de servicio, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado (artículo 28).

4. En cuanto a sus funciones, de acuerdo al artículo 2° de la ley N° 18.902, a la SISS le corresponde la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base.
5. Para desarrollar las funciones antes señaladas, la SISS está dotada de ciertas potestades administrativas o poderes jurídicos, las que le permiten satisfacer los fines o intereses públicos que el legislador ha puesto bajo su tutela .
6. Por una parte, identificamos una potestad fiscalizadora, consagrada en el artículo 2° de la ley N° 18.902 y que implica que la SISS tiene la potestad para fiscalizar el cumplimiento por parte de las empresas sanitarias de las normas referidas a las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas, así como la correcta aplicación de las tarifas correspondientes, el cumplimiento de los planes de inversión y el respeto a los derechos de los usuarios. En este contexto, entre los objetivos de la SISS y que se desprenden de su misión esencial, se destaca por una parte, la necesidad de fomentar que las empresas sanitarias asuman cabalmente su responsabilidad como proveedoras de un servicio público en un mercado monopolístico, estableciendo mecanismos regulatorios que incentiven el desarrollo de sistemas y procedimientos de autocontrol confiables; y, por otra, la orientación de su acción fiscalizadora hacia el control de los resultados de la acción de las empresas, prestando especial atención a cualquier señal de incumplimiento de las normas y estándares convenidos o pactados y de los sistemas de autocontrol.
7. Por otra parte, es posible también identificar una potestad sancionadora, la que le permite imponer sanciones administrativas a los particulares en caso de infracción de ciertos deberes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta potestad, pese a no estar expresamente reconocida para los

órganos de la Administración del Estado en nuestra Constitución Política de la República, se encuentra recogida en diversas leyes administrativas especiales, lo que también se extiende a la SISS. Así, de acuerdo al artículo 11 de la ley N° 18.902 la SISS ostenta una potestad sancionadora, lo que le permite imponer multas a beneficio fiscal a los prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la propia Superintendencia. Esta potestad está atribuida al Superintendente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4° letra e) de la ley N° 18.902, el que debe ejercerla en conformidad a la ley. Además, esta regulación sectorial permite, según lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la ley general de servicios sanitarios, imponer la sanción de caducidad de la concesión antes de entrar a ella (artículo 24) o durante la explotación de la misma (artículo 26), atribuyendo la potestad, en este caso, al Presidente de la República.

8. En este caso - como en todos los casos de otorgamiento de facultades sancionadoras a un órgano de la administración - el legislador ha atribuido una potestad sancionadora a un órgano administrativo específico, como complemento de sus potestades fiscalizadoras, disponiendo al efecto, en la mayoría de los casos, de un procedimiento administrativo para el ejercicio de esta potestad, de una configuración genérica de las conductas infractoras que habilitan la sanción y de una enumeración de las sanciones posibles a aplicar, en cada caso.
9. Pues bien, en cuanto a la sanción de caducidad, ésta se encuentra consagrada en el artículo 26 y siguientes de la ley general de servicios sanitarios y complementada por el artículo 61 del DS N° 1199, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas o reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios.
10. En este contexto, y de acuerdo al artículo 26 de la ley general de servicios sanitarios el Presidente de la República, en base a un informe técnico elaborado

por la entidad normativa, podrá declarar caducadas las concesiones que se encuentren en explotación: a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponde a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo; b) si la concesionaria no cumple el programa de desarrollo; y c) por incumplimiento del contrato a que se refiere el inciso segundo del artículo 11° y de lo dispuesto en el artículo 32° de la presente ley.

11. Para la calificación de dichas causales, la entidad normativa deberá considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.
12. Pues bien, es de público conocimiento la crisis de suministro de agua potable en la que la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. tiene sumida a la ciudadanía de Osorno.
13. En este contexto, resulta evidente que la empresa no habría cumplido, en la prestación del servicio público de distribución de agua potable, con las exigencias establecidas en la normativa anteriormente expuesta, así como tampoco, con las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo.
14. El agua fresca, en uno de los pasos técnicos básicos, se trata con filtros de cuarzo y carbón que ayudan a forzar o a levantar la presión mediante motores eléctricos. Debido al alto costo de la electricidad en hora punta, ESSAL S.A. habría procedido a la instalación de generadores que operan con combustible diesel para generar energía propia durante la hora punta, abaratando sus costos.
15. Al momento en que acontecieron los hechos, presuntamente uno de los dependientes de ESSAL S.A. no habría hecho un cierre correcto de la llave de paso del combustible diesel después apagar los generadores que funcionan con dicho combustible al término de la hora punta, y así reconectar nuevamente el sistema que funciona con energía eléctrica provista por SAESA.
16. Producto de ese hecho, se habrían vaciado 8.500 litros, bastante más que 1.100 litros como lo habría informado la empresa, al depósito de agua en el que se encuentran instalado los filtros de cuarzo y carbón. A mayor abundamiento, y

a falta del personal necesario y de la inexistencia de controles permanentes de seguridad, el combustible habría estado escurriendo por 12 horas antes que la empresa se percatara de semejante contaminación.

17. Para mayor gravedad de los hechos, según señalan expertos en la materia, los filtros contaminados no son recuperables rápidamente, el lavado de ellos requiere de tiempo más allá del señalado por la empresa. Además, los mismos, son de gran tamaño, y están instalados en hoyos forrados de hormigón lo que dificulta aún más el proceso de limpieza. Por lo demás, toda la canalización del agua se realiza a través de zanjas y tubos de concreto, que son de superficie porosa, y, por lo tanto, también habrían absorbido parte del Diesel derramado. Así, resulta evidente que la solución más rápida no sería recuperarlos, sino construir filtros nuevos, los que sin embargo no son fáciles de conseguir en el mercado.
18. Todo lo anterior nos hace preguntarnos, si pese a que el suministro la calidad del servicio es la que corresponde no sólo si el agua es o no potable sino que también respecto de la eficiencia del suministro respecto de los cortes temporales y la presión del mismo.
19. Para mayor gravedad, según información difundida hoy en medios de comunicación, la Superintendencia de Servicios Sanitarios en octubre de 2018 tuvo pleno conocimiento de graves irregularidades en la infraestructura crítica de las plantas de Essal S.A ubicadas en Osorno.
20. En efecto, en mayo del año pasado el regulador contrató a una consultora ambiental para que evaluara el Sistema de Producción de Agua Potable de Essal. Las conclusiones a las que arribaron los auditores fueron reveladoras. El listado de anomalías es largo y hablan por sí solos: equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza, mantenimiento irregular de la maquinaria, falta de control sobre los operarios, lechos de agua sucios, omisión de información y la entrega de datos de la empresa a la autoridad, que ponen en duda las pérdidas de producción de agua. Esto no sorprende cuando el operario de la planta ha señalado que debía “pegarle con una piedra al sistema para ver si estaba operativo”

21. En consecuencia, cuando se entregó formalmente el documento, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ya tenía en su poder un informe técnico que establecía que las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo para garantizar el adecuado suministro no se cumplían, debió tomar las medidas adecuadas, y no lo hizo.
22. La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. tiene una jurisdicción que comprende la Región de Los Lagos(X) y parte de la Región de los Ríos (XIV), abarcando un área de 66.997 Km² de superficie y atendiendo a 32 localidades pertenecientes a las provincias de: Valdivia y Ranco en el caso Región de los Ríos y Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena en el caso de la de la Región de los Lagos, llegando con sus servicios a una población superior a los 630.000 habitantes. Las zonas de operación de la empresa concentraran importantes actividades agroindustriales, forestales, pesqueras y portuarias, además de una creciente actividad comercial, residencial y de servicios. Todas las cuales se encuentran gravemente afectadas por su negligencia y por la falta de desarrollo de las mínimas medidas de seguridad del suministro que le corresponde tener.
23. La población de la ciudad de Osorno sufrió las graves consecuencias de la interrupción ilegal e injustificada del servicio público de distribución de agua potable que el Estado le confió mediante las concesiones respectivas. Dadas las enormes falencias en los sistemas de seguridad en la distribución que se han evidenciado en este caso, y la política de abaratamiento de costos que la empresa habría llevado a cabo, que sumó el elemento diesel como un riesgo de operación, nada impide pensar que nuevas crisis como éstas puedan volver a ocurrir afectando cualquier otra de las zonas que su concesión cubre, cabe preguntarse con qué autorización contó la empresa con este cambio o alternativa de suministro de energía. Y que rol jugó la Superintendencia de Servicios sanitarios en la concesión de autorizaciones y si solicitó o no la opinión a su par de electricidad y combustible
24. A lo anterior, se suma que la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. tiene un largo historial de faltas a la normativa, cuenta con sumarios sanitario en su contra por la contaminación causante por aguas servidas no tratadas

debidamente en la ciudad de Ancud; en su contra se encuentra pendiente un fallo de los Tribunales Ambientales por la contaminación que dicha empresa causó en el lago Llanquihue en el año 2017 y que causó un colapso de la red sanitaria de Puerto Varas. Por estos hechos en junio de 2018, fue multada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios por la suma de \$400 millones por reiteradas descargas de aguas servidas sin tratamiento en dicho lago. El propio Superintendente de Servicios Sanitarios ha informado que, al día de hoy, se han abierto 85 procesos sancionatorios, por un total de 3.500 millones de pesos en multas en su contra.

25. Conforme a la Ley N° 18.902, de 27 de enero de 1990 y al Decreto N° 1.199 que aprueba el Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios, el prestador del servicio:

- a. Está obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud³.
- b. Debe garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor. Circunstancias que no han acontecido en este caso⁴.
- c. Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión ⁵.

Todas obligaciones que estarían incumplidas por la empresa provocando las graves consecuencias que son de público conocimiento.

³ Artículo 34° Ley General de Servicios Sanitarios

⁴ Artículo 35° inciso 1° de la Ley General de Servicios Sanitarios Ley General de Servicios Sanitarios y 97 del Reglamento de Concesiones

⁵ Artículo 35° de la Ley General de Servicios Sanitarios y 97 del Reglamento de Concesiones.

26. Por otro lado, conforme al Artículo 7° inciso primero y la letra a) del artículo 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios corresponde al Presidente de la República caducar una concesión, entre otras causales, si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo; por medio de un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, fundado en el informe técnico de caducidad elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que establecerá el cumplimiento de la causal, la gravedad de sus consecuencias y la reiteración en las faltas.
27. En efecto, corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, elaborar un informe un técnico de caducidad que establezca la configuración de alguna de las causales legales, considerando la gravedad de las consecuencias y la reiteración de la ocurrencia⁶. En este caso, se configuraría la causal de la letra a) del artículo 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios referida en el numeral anterior. Y, establecida la configuración de la causal, el Presidente de la República debe, de conformidad a lo dispuesto del artículo 27 inciso 1° de la Ley General de Servicios Sanitarios y el artículo 61° del Reglamento de Concesiones, caducar la concesión mediante decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, y disponer, a la vez, la administración provisional del servicio designando al administrador de entre aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en un registro público que para tal efecto entidad normativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, el Senado acuerda lo siguiente:

Solicitar a S. E el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, si lo tiene a bien, se sirva:

1. Instruir al señor Ministro de Obras Públicas, proceda urgentemente a la tramitación de procedimiento de caducidad de las concesiones otorgadas a la Ley General de Servicios Sanitarios.

⁶ Artículo 26 inciso 2° Ley General de Servicios Sanitarios.

2. Instruir al Superintendente de Servicios Sanitarios, la entrega del informe técnico de caducidad al más breve plazo.
3. Dictar el decreto respectivo de caducidad de todas las concesiones de servicios de producción y distribución de agua potable, y de los servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas otorgadas a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, ESSAL, en el territorio jurisdiccional en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
4. Disponer, a la vez, la administración provisional del servicio.
5. Designar al administrador de entre aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en un registro público que para tal efecto lleva la entidad normativa.
6. Solicitar la apertura de una investigación sumaria a efectos de determinar:
 - a) La procedencia o no de responsabilidades en el manejo de la fiscalización y autorizaciones a la empresa Sanitaria ESSAL.
 - b) La procedencia o no, producto de lo anterior de un sumario administrativo
 - c) Las sanciones que correspondan dentro de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en el Ministerio de Obras Públicas.
7. Impulsar las reformas legales que sean necesarias para rectificar la normativa legal, en general y además revisar los requisitos que se exigen para la integración de los directorios de las empresas sanitarias, buscando disminuir cualquier posible situación de conflicto de interés, evitando que exista duplicación en la integración de directorios en una misma área y prohibiendo el paso desde una función ejecutiva en el Estado a la integración de directorios en empresas privadas
8. Presentar la indicación sustitutiva, al proyecto de modernización de las empresas sanitarias, Boletín 10.795-33 que actualmente se tramita en la comisión de obras públicas del Senado, y se encuentra en segundo trámite constitucional, en el más breve plazo posible.
9. Solicitar un informe al Ministerio del Interior del rol jugado por ONEMI y la Intendencia, quienes claramente no han asumido el rol que debieron jugar en la situación vivida por la comunidad de Osorno-

VII. MINUTA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES SANITARIAS

El Presidente de la República pueden caducar una concesión si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo; por medio de decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas fundado en el informe técnico de caducidad elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que establecerá el cumplimiento de la causal y la gravedad de sus consecuencias.

1. PRESTADORES DE SERVICIOS SANITARIOS SUJETOS A CONCESIÓN, Y POR ENDE, SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY: artículos 4° y 5° de la Ley General de Servicios Sanitarios, D.F.L. N° 382 de diciembre de 1988

- ✓ “Estarán sujetos al régimen de concesiones todos los prestadores de servicios sanitarios definidos en el artículo 5° de esta ley, cualquiera sea su naturaleza jurídica, sean de propiedad pública o privada”.

Son servicios públicos sujetos a concesión:

“El **servicio público de producción⁷ de agua potable**, aquel cuyo objeto es producir agua potable para un servicio público de distribución.

El **servicio público de distribución de agua potable**, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a través de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación.

El **servicio público de recolección de aguas servidas**, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a través de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación.

El **Servicio público de disposición de aguas servidas**, aquel cuyo objeto es disponer las aguas servidas de un servicio público de recolección.” (artículo 5° de la Ley General de Servicios Sanitarios)

- ✓ Los prestadores están sujetos a la supervigilancia y control de la SSS Para tales efectos, la que podrá pedir informes e inspeccionar los servicios, requerir los diseños correspondientes a los proyectos incorporados en el

⁷ Artículo 3° Se entiende por producción de agua potable, la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas.

programa de desarrollo, revisar o auditar su contabilidad y, en general, adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. (Artículo 55° inciso 1° LGSS). El incumplimiento de lo dispuesto por la SSS da lugar a la aplicación de multas.

2. LA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES SANITARIAS EXISTE LEGALMENTE:
Artículo 7° inciso primero, Ley General de Servicios Sanitarios

“La concesión tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos indicados en el número 1 del artículo 1° de esta ley⁸. El plazo por el que se otorga la concesión es indefinido, sin perjuicio de su caducidad, de conformidad a lo establecido en la ley”.

3. REGULACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES QUE SE ENCUENTREN EN EXPLOTACIÓN

Está regulada en los Artículos 26 a 31 ° de la Ley General de Servicios Sanitarios (LGSS), y en los Artículos 61 a 68 del Decreto N ° 1.199 que Aprueba el Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios. (RC)

4. CAUSALES DE CADUCIDAD: Artículo 26° de la Ley General de Servicios Sanitarios. (LGSS)

“El Presidente de la República, en base a un informe técnico elaborado por la entidad normativa, podrá declarar caducadas las concesiones que se encuentren en explotación:

a) *si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo;*

b) si la concesionaria no cumple el programa de desarrollo;

⁸ Artículo 1°. Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

1. Las disposiciones relativas al régimen de explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, servicios denominados en adelante, servicios sanitarios.

2. Las disposiciones relativas al régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios sanitarios.

3. La fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios.

4. Las relaciones entre las concesionarias de servicios sanitarios y de éstas con el Estado y los usuarios.

c) *por incumplimiento del contrato a que se refiere el inciso segundo del artículo 11^º y de lo dispuesto en el artículo 32^º 10 de la presente ley.*

Para la calificación de dichas causales, la entidad normativa deberá considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Caducada una concesión, la entidad normativa podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el concesionario tendrá el plazo de treinta días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, se aplicará lo dispuesto en la letra a) de este artículo.

5. CAUSAL DE CADUCIDAD DE LA LETRA A) DEL ARTICULO 26:

“a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo”

Conforme a la LGSS el prestador del Servicio tiene las siguientes exigencias:

- ✓ Está obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud. (Artículo 34^º LGSS)
- ✓ Debe garantizar la continuidad¹¹ y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor¹². (Artículo 35^º inciso 1^º LGSS y 97 de RC)

⁹ Los derechos y obligaciones que se deriven del cobro y recaudación a los usuarios el valor de las prestaciones será convenido directamente entre las concesionarias y su incumplimiento no podrá afectar la prestación de los servicios.

¹⁰ Las transferencias el dominio o el derecho de explotación de una concesión, deberá ser previamente aprobado por la entidad normativa

¹¹ Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá afectarse la continuidad del servicio, mediante interrupciones, restricciones y racionamientos, programados e imprescindibles para la prestación de éste, los que deberán ser comunicados previamente a los usuarios. (Artículo 35^º inciso 1^º LGSS)

¹² Interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser comunicados al usuario, con a lo menos, 24 hrs. de anticipación. Las interrupciones programadas que impliquen una suspensión del suministro inferior a 15 hrs. no podrán realizarse entre las 6:00 y las 15:00 horas Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, un mismo cuartel no podrá verse afectado por más de una interrupción programada en el período de un mes; y por más de 6 interrupciones programadas en el período de un año, salvo situaciones de excepción informadas oportunamente a la Superintendencia (Artículo 97^º Reglamento)

- ✓ Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión. Se podrán modificar los niveles de calidad de los prestadores, a proposición de la Superintendencia, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo (Artículo 36° bis, incisos 1° y 2° LGSS)
- ✓ La Superintendencia llevará un Registro de las concesiones otorgadas, donde anotará el decreto del Ministerio de Obras Públicas que otorgue una concesión, señalando su número y fecha de expedición; copia de los decretos; las garantías involucradas; las multas aplicadas y otras medidas complementarias. Información que es de consulta pública. (Artículo 14° RC)

El decreto de otorgamiento de la concesión incluirá, entre otras, Identificación de la concesionaria: nombre, RUT, domicilio y las condiciones de prestación de los servicios que se indicarán en la Ficha de Antecedentes Técnicos, aprobada por la Superintendencia.; y las garantías ordenadas en el artículo 20° ¹³de la Ley(Artículo 35° RC)

La garantía de fiel cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio será por un monto de 0.03 UF por cada usuario del servicio (número de arranques de agua potable o número de uniones domiciliarias de alcantarillado) o su equivalente. Garantía que se recalcula anualmente, considerando el número de usuarios a servir, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. (Artículo 40° RC)

6. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA CADUCIDAD:

- 1) La Superintendencia de Servicios Sanitarios, debe elaborar un informe un técnico de caducidad que establezca que se configura alguna de las causales legales y considere la gravedad de las consecuencias y la reiteración de la ocurrencia (Artículo 26 inciso 2° LGSS)
- 2) Configurada alguna de las causales el Presidente de la República caducará la concesión mediante decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, fundado en el informe técnico elaborado por la entidad normativa. (Artículo 27 inciso 1° LGSS; artículo 61° RC)

¹³ La garantía de fiel cumplimiento por un monto que resguarde efectivamente el cumplimiento de su programa de desarrollo y otra garantía de fiel cumplimiento de las condiciones del servicio, que se calcula considerando el número de usuarios a servir.

- 3) Y se dispondrá la administración provisional del servicio designando al administrador¹⁴ de entre aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en un registro público que para tal efecto entidad normativa”. (Artículo 27 inciso 1° LGSS; artículo 61° Reglamento de Concesiones)
- 4) Si se tratase de una concesión que se hubieren entregado en explotación a un tercero distinto del dueño, para emitir el informe técnico la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS) deberán cumplir previamente las siguientes exigencias: (Artículo 62° inciso 1° RC)
- a) Poner los hechos graves que constituyen una causal de caducidad en conocimiento del concesionario y de quien explote la concesión.
 - b) Informar a los acreedores financieros de quien explota la concesión, informados a la Superintendencia¹⁵.
 - c) Exigir al prestador la presentación de un informe que contenga, entre otras, las medidas necesarias para evitar el menoscabo o interrupción de los servicios que suministra dentro de un plazo no inferior a 10 días hábiles, a contar de la respectiva notificación.
 - d) La Superintendencia aceptará o rechazará el informe. Si lo acepta, arbitrará las medidas necesarias para darle efectivo y oportuno curso, bajo la supervisión de un inspector fiscal. Si el informe lo rechaza, la Superintendencia procederá a evacuar el informe técnico de caducidad de la concesión. (Artículo 62° inciso 2° RC)
 - e) La Superintendencia podrá prescindir del informe del prestador, si éste no lo entrega en el plazo previsto en esta disposición. (Artículo 62° inciso 3° RC)
- 5) La SSS procederá a hacer efectivos los instrumentos de garantía otorgados para asegurar la prestación del servicio en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en la normativa general aplicable a la concesión. (Artículo 64° RC)
- 6) El afectado por la caducidad podrá reclamar de ella, ante el juez de letras en lo civil que corresponda, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación por la Superintendencia, del decreto supremo que la declare, en procedimiento sumario y su interposición no suspenderá la caducidad decretada, salvo que el juez de la causa resuelva en contrario”. (Artículo 27 inciso 2° LGSS y Artículo 65° RC)

¹⁴ “El administrador provisional del servicio tendrá todas las facultades del giro concesión ha sido caducada, que la ley o sus estatutos señalan al directorio y a sus gerentes. Igualmente tendrá los deberes y estará sujeto a las responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas. (Artículo 27 inciso 3° LGSS)

¹⁵ La Superintendencia se limitará a informar a los acreedores oportunamente individualizados por el prestador conforme a la letra b) anterior y a verificar la aprobación de éstos al informe según se señala en la letra c), no correspondiéndole la calificación de éstos ni ninguna otra actuación respecto de ellos. (Artículo 62° inciso 3° Reglamento)

- 7) La SSS licitará la concesión y los bienes afectos a ella, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha de caducidad. (Artículo 28 inciso 1° y 2° LGSS)

“El llamado a licitación de la concesión caducada se publicará por una vez en el Diario Oficial y por medio de avisos, repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre.

La adjudicación de la licitación recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y a la tarifa vigente, en el interesado que ofrezca el mayor valor por la concesión y por los bienes afectos a ella.

En el caso de no haber interesados, se llamará nuevamente a licitación, (Artículo 29 incisos 1°, 2° y 3° LGSS).

El producto de la licitación se distribuirá en el siguiente orden de prelación:
1°. Al pago de los gastos necesarios y obligaciones contraídas para la prosecución de la administración provisional, incluyendo las costas de ésta y de la licitación.

2°. Al pago de los acreedores según las reglas de la preferencia establecidas en los artículos 2.470 y siguientes del Código Civil.

3°. Al pago de las acreencias por multas y sanciones que no se hubieren satisfecho con la ejecución de las garantías correspondientes.

El saldo, si lo hubiere, se entregará al propietario de la concesión caducada”.(Artículo 30 LGSS).

VIII. SOLICITUD AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO PARA PROCEDER JUDICIALMENTE EN CONTRA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. (ESSAL)

Materia: SOLICITA PROCEDER JUDICIALMENTE EN CONTRA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. (ESSAL), SEGÚN EN DERECHO CORRESPONDA, POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO y a LA CIUDADANÍA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES, DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE y LA INTERRUPCIÓN INDEBIDA DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE OSORNO.

1. Es de público conocimiento la crisis de suministro de agua potable en la que la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. tiene sumida a la ciudadanía de Osorno.
2. Resulta evidente que la empresa no ha cumplido, en la prestación del servicio público de distribución de agua potable, las exigencias establecidas en la Ley General de Servicios Sanitarios y sus reglamentos, así como tampoco, con las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo.
3. La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. tiene una jurisdicción que comprende la Región de Los Lagos(X) y parte de la Región de los Ríos (XIV), abarcando un área de 66.997 Km2 de superficie y atendiendo a 32 localidades pertenecientes a las provincias de: Valdivia y Ranco en el caso Región de los Ríos y Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena en el caso de la de la Región de los Lagos, llegando con sus servicios a una población superior a los 630.000 habitantes.
4. Hoy, la población de la ciudad de Osorno está sufriendo las graves consecuencias de la interrupción indebida del servicio público de distribución de agua potable que el Estado de Chile le confió mediante la concesión respectiva. Pero, dadas las enormes falencias en los sistemas de seguridad en la distribución que se han evidenciado en este caso, nada impide pensar que nuevas crisis como éstas puedan volver a ocurrir afectando cualquier otra de las zonas que su concesión cubre.
5. Las zonas de operación de la empresa concentrarán importantes actividades agroindustriales, forestales, pesqueras y portuarias, además de una creciente actividad comercial, residencial y de servicios. Todas las cuales se encuentran gravemente afectadas por su negligencia y por la falta de desarrollo de las mínimas medidas de seguridad del suministro que le corresponde tener.
6. Conforme a la Ley General de Servicios Sanitarios y su respectivo Reglamento, el prestador del Servicio:
 - a. Está obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad normativa y del Ministerio de Salud. (Artículo 34° Ley General de Servicios Sanitarios)
 - b. Debe garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor. Lo que obviamente, no

es el caso. (Artículo 35° inciso 1° Ley General de Servicios Sanitarios Ley General de Servicios Sanitarios y 97 del Reglamento de Concesiones)

- c. Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento, el cual deberá estar basado en criterio de carácter general y haberse dictado antes del otorgamiento de la concesión (Artículo 35° ° Ley General de Servicios Sanitarios y 97 del Reglamento de Concesiones)

Todas obligaciones incumplidas por la empresa provocando las graves consecuencias que son de público conocimiento.

En razón de lo expuesto, solicito a usted que en su calidad de Presidenta , disponga que el Consejo de Defensa del Estado, proceda judicialmente, en contra de la empresa de servicios sanitarios de los lagos S.A. (ESSAL), según en derecho corresponda, por los perjuicios ocasionados al Estado y a la ciudadanía por incumplimiento de las exigencias legales y de las condiciones de prestación del servicio de suministro de agua potable, que han provocado la interrupción indebida del servicio público de distribución agua potable en la ciudad de Osorno.

IX. INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, INICIADO EN MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Y MODIFICA NORMAS LEGALES QUE INDICA. BOLETÍN N ° 12.027-07

I. Para modificar el artículo 18, Líneas de acción y programas de protección especializada, del siguiente modo:

1. Sustituir el numero 1) del inciso primero, por el siguiente:

“1) Diagnóstico, Plan de Restitución y Seguimiento de Casos. Averiguación y evaluación integral de la situación de los niños, niñas, y adolescentes en riesgo y desprotección, y del grupo familiar y social en el que se desenvuelven, realizados por profesionales multidisciplinarios idóneos, con el fin de conocer todos los derechos vulnerados o restringidos, de elaborar el plan de restitución integral de derechos y hacer su seguimiento hasta el cumplimiento de los total objetivos perseguidos”.

2. Sustituir el numero 2) del inciso primero, por el siguiente:

“2) Pericias. Análisis, requeridos por la autoridad judicial, realizados por un profesional o equipo de profesionales especialistas acreditados, respecto de los niños, niñas y adolescentes, su grupo familiar, adultos significativos y/o su entorno con el fin de obtener criterios certeros e indubitados útiles para la determinación precisa y objetiva de la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, las afectaciones sufridas, los daños ocasionados, y/o las acciones requeridas para la restitución de derechos y la reparación de los daños.

3. Sustituir el numero 3) del inciso primero, por el siguiente:

“3) Restitución de Derechos. Acciones, diseñadas y desarrolladas por profesionales multidisciplinarios respecto de niños, niñas, y adolescentes en riesgo, desprotección, o que son víctimas de vulneración, su grupo familiar y/o o de adultos significativos, destinadas a disminuir los factores de riesgo, potenciar los factores protectores presentes en el sistema familiar, y superar los obstáculos materiales y sociales que impiden el disfrute efectivo de sus derechos esenciales.

4. Sustituir el numero 4) del inciso primero, por el siguiente:

“4) Reparación. Conjunto de acciones diferenciadas, preferenciales e integrales destinadas a la rehabilitación y reparación de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, determinadas con justicia, oportunidad y suficiencia, con la participación de las víctimas y/o sus representantes legales, atendiendo a sus necesidades y expectativas de modo de que se produzca el efecto reparador.

5. Sustituir el numero 5) del inciso primero, por el siguiente:

“5) Cuidado Alternativo. Es el conjunto de modalidades alternativas de cuidado puesta a disposición niños y niñas que por diversas circunstancias no cuenta con los cuidados permanentes de al menos uno de sus padres biológicos o adoptivos, o de adultos en condiciones de responsabilizarse de su crianza, ejecutadas por cuidadores especialmente entrenados para amparar y restituir los derechos de niños y niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad emocional y afectiva”.

6. Sustituir el numero 6) del inciso primero, por el siguiente:

“6) Revinculación y Reintegración familiar. Acciones destinadas a afianzar la capacidad de los padres, o de familiares que puedan asumir el cuidado personal,

de un niño, niña o adolescente que se encuentre en un acogimiento alternativo, de tipo residencial o familiar, para ejercer dicho cuidado por sí mismos de un modo adecuado, propiciando su más pronto egreso y reintegración familiar”.

7. Agregar un número 7 nuevo al inciso primero, nuevo del siguiente tenor:

“7) Preparación y Acompañamiento para la Vida Independiente. Acciones desarrolladas sistemáticamente, y con antelación suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines, desarrolladas por los centros de acogida con el fin de preparar a los niños, niñas o adolescente para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su preparación para la vida cotidiana, el trato y desenvolvimiento social, la educación y la formación profesional continua de jóvenes”.

8. Agregar un numero 8 nuevo en el inciso primero, del siguiente tenor:

8) Adopción. Desarrollo de las acciones necesarias para la preparación y el seguimiento del proceso por el cual una familia externa cualquiera sea su composición, toman como propio a un hijo ajeno de una familia que no está en condiciones de entregarle un cuidado adecuado, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación, de conformidad con la ley N° 19.620 que regula la adopción.

9. Para sustituir en el inciso segundo del artículo 18, la frase “de acuerdo al reglamento de la ley N ° 20.032” por la siguiente:

“de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 a 25 de esta ley y en el Reglamento que a estos efectos dictará el Ministerio de Desarrollo Social en conformidad con los principios y estándares establecidos en los artículos 4° y 19° de la presente ley, artículos 2 y 25 letras a, b y c de la Ley N ° 20.032, que establece el sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención, y el reglamento que , conforme a tales artículos, dicte el Ministerio de Desarrollo Social según lo establece el artículo 3 ter de la ley N ° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social”

10. Para agregar al final de la primera oración del inciso tercero del artículo 18°, la siguiente frase:

“y serán modificadas y adecuadas para su eficiente desarrollo y el cumplimiento efectivo de sus fines, con la periodicidad y urgencia que demanden las

evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio y por los terceros evaluadores a que se refiere esta ley”.

11. Para sustituir en el inciso cuarto del artículo 18 la frase “entre otros, los cuales serán” por la siguiente:

“igualdad de género, deporte, cultura, turismo y recreación, entre otras, coordinados por la Comisión a que hace referencia el artículo 17 y las oficinas administrativas locales de protección de la niñez. La comisión interministerial fijará las líneas de atención especializada básicas que se desarrollarán como complemento a la labor del Servicio.

12. Para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“La comisión interministerial fijará las líneas de atención especializada básicas que se desarrollarán como complemento a la labor del Servicio en el plazo de 6 meses contados desde la publicación del presente cuerpo legal”.

13. Para elimina el inciso quinto del artículo 18.

14. Para incorporar en el inciso sexto del artículo 18, a continuación de la primera oración, una nueva del siguiente tenor:

“Del mismo modo, se deberá incluir el trabajo con los otros actores de la convivencia diaria del NNA, por ejemplo, adultos relevantes, encargados de convivencia escolar, líderes y referentes comunitarios y pares en el barrio”.

15. Para agregar al final del inciso sexto del artículo 18, las siguientes palabras precedidas de una coma:

“pares, adultos relevantes y referentes comunitarios”.

16. Para sustituir el inciso séptimo del artículo 18, por el siguiente:

“Tratándose de cuidados alternativos, el Estado priorizará la creación y capacitación y financiamiento necesarios para la provisión de acogimientos familiares, y sólo secundariamente, la provisión de cuidados institucionales”.

17. Para agregar al final del inciso octavo del artículo 18, la siguiente oración precedida de una coma:

“garantizará la disponibilidad de familias de acogida de emergencia y familia de acogida para niños y niñas entre 0 y 3 años”

18. Para agregar un artículo 18 bis del siguiente tenor:

“Art 18 bis. Deber de Ejecución coordinada. En la ejecución de los programas de protección especializada, el Servicio y los colaboradores acreditados con los que se ha convenido su ejecución, trabajarán en coordinación permanente con las Oficinas Locales de Protección dependientes de la Subsecretaría de la Niñez, los demás servicios públicos, municipios, tribunales de justicia que correspondan. Es responsabilidad esencial de las Oficinas Locales , de los directores regionales del Servicio, y de los directores de los programas de atención y centros de acogimiento alternativo, el desarrollo de acciones y protocolos de coordinación permanente para la ejecución de las prestaciones que tanto a los agentes de protección especializada como a otros organismos del Estado corresponde , en cumplimiento del plan de restitución de derechos diseñado en protección de cada niño, niña o adolescente atendido por el Servicio. La falta de coordinación oportuna y eficiente constituye una vulneración grave de sus deberes y dará a origen a la aplicación de las sanciones que en derecho correspondan”.

19. Para agregar un artículo 18 ter del siguiente tenor:

“Art 18 ter. Deber de atención diferenciada. Cada plan individual de restitución de derechos debe ser diseñado y ejecutado en forma personalizada, especificando y cumpliendo con los aspectos característicos y diferenciados de las acciones a desarrollar atendida la singularidad de cada niño, niña y adolescente y las condiciones particulares del entorno familiar y social al que pertenece. El incumplimiento de este deber constituye una vulneración grave de deberes y dará a origen a la aplicación de las sanciones que en derecho correspondan”.

20. Para agregar un artículo 18 quáter del siguiente tenor:

“Art 18 quáter. Recursos humanos especializados. Es esencial para la calidad y efectividad de la intervenciones que se realizan en la vida del niños y en su entorno familiar y comunitario, la especialización en atención de niñez en situación de alta vulnerabilidad emocional y afectiva debido a la desprotección y vulneración de sus derechos, que posean quienes trabaja directamente con los niños, niñas y adolescentes tanto en las intervenciones que reciben en medio libre como en las que reciben en el sistema de acogimiento alternativo. El Estado exigirá y garantizará el desempeño de profesionales especializados y de cuidadores especialmente entrenados para amparar y restituir los derechos de niños y niñas y

adolescentes en situación de alta vulnerabilidad emocional y afectiva en todos los programas de atención que desarrolle el Servicio y sus colaboradores.”

21. Para agregar un artículo 18 quinquies del siguiente tenor:

“El Servicio garantizará la atención de protección de especializada para todos los niños que lo requieran en todas las regiones del país, conforme a la demanda real o estimada de oferta de atención ambulatoria y de cuidado alternativo en cada localidad, sea que la presten los organismos colaboradores acreditados o el Servicio de protección o los demás servicios del Estado que correspondan. El incumplimiento de este deber constituye una vulneración del deber constitucional del artículo 5, inciso segundo”.

II. Para modificar el artículo 20, de la siguiente manera:

1. Sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Diagnóstico, Plan de Restitución y Seguimiento de Casos. Es la línea de acción destinada a evaluar la situación del niño y el grupo familiar y social al que pertenece a partir de la detección de una posible situación de riesgo, amenaza o vulneración de sus derechos; que realizada la evaluación, diseña el plan de restitución de derechos aplicable al caso concreto; y que realiza el seguimiento de los casos atendidos, velando por el oportuno, adecuado y completo cumplimiento de los objetivos del plan individual”.

2. Sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“La línea de acción se desarrollará, como mínimo, a través de los siguientes programas:

a) Del Diagnóstico y elaboración del plan de restitución de derechos: Corresponde a la averiguación, estudio y evaluación integral de la situación de los niños, niñas, y adolescentes en riesgo y/o desprotección, y del grupo familiar y social en el que se desenvuelven, realizados por profesionales multidisciplinarios idóneos, con el fin de conocer todas las amenazas a derechos, los derechos restringidos y vulnerados y las causas objetivas o subjetivas que generan tal situación; y en el diseño el plan de restitución integral de derechos aplicable al niño, niña o adolescente de que se trate atendidas sus particulares características y necesidades y las de su grupo familiar y social, que incluya las propuestas de acciones y prestaciones concretas requeridas para su protección.

En caso de constatarse la existencia de riesgos , restricciones o vulneraciones no graves de derechos, los profesionales a cargo del diagnóstico diseñarán un plan integral de restitución de derechos indicando a la autoridad local de

protección administrativa competente todas las acciones de protección especializada requeridas, los prestadores disponibles a nivel local y regional , o la falta de aquellos , si fuere el caso, para que dicha autoridad proceda a la más pronta gestión del caso, derivando la atención planificada a los programa de protección especializada correspondientes. En caso de constatarse la existencia de riesgos, restricciones o vulneraciones de derechos, de carácter grave, los profesionales realizarán el diagnóstico y lo comunicarán con urgencia a la autoridad local de protección administrativa competente, quien lo derivará de inmediato a sede judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que tanto el equipo de diagnóstico como la autoridad local deban tomar las acciones urgentes requeridas cuando se encuentre en peligro inminente la vida o la integridad física de una niño, niña o adolescente.

El diagnóstico incluirá la opinión del niño, niña y adolescente de un modo conforme a su edad y grado de madurez. Y deberá contener:

1. El diagnóstico de la situación de derechos del niño, niña o adolescente
2. El diagnóstico del nivel de peligro para su integridad física y emocional
3. El diagnóstico de las condiciones de las personas adultas y de lo que necesitan para garantizar el ejercicio de derechos de los niños a su cargo
4. La evaluación y determinación del interés superior del niño
5. Las medidas de protección especial, servicios y acciones de restitución de derechos individuales para cada niño
6. El diagnóstico de los recursos locales y regionales
7. Los servicios y acciones para acercar recursos o servicios a las personas adultas a cargo del niño, niña o adolescente.

El diagnóstico se traduce en un documento profesional, objetivo, libre de toda clase de sesgos y opiniones personales, coherente, fundado en evidencia contrastable, y de carácter personal e intransferible con el que se inicia el procedimiento de protección administrativa, pero no constituye prueba ante los tribunales de justicia.

El diseño de un plan de restitución de derechos es el trabajo de planeación post diagnóstico consistente en la determinación individualizada de lo que necesita cada niño, niña y adolescente para la restitución de todos sus derechos amenazados, restringidos y /o vulnerados, y de la combinación precisa de los servicios y asistencia que cada uno de ellos requiere en lo inmediato, en casos urgentes, o en corto, mediano y largo plazo, para la restitución de sus derechos. Toda acción de plan estará plenamente fundada y motivada conforme al diagnóstico realizado.

Existirá un diagnóstico y un plan de restitución individual inicial, y sucesivas evaluaciones posteriores que den cuenta del avance de las acciones y

prestaciones y del grado de restitución y reparación de las vulneraciones y sus consecuencias. Todas las evaluaciones e intervenciones realizadas al niño y su familia con posterioridad han de basarse y ser coherentes con ambos instrumentos iniciales, evitando repeticiones, sobre intervenciones y acciones innecesarias.

b) Gestión y seguimiento de casos: Articulación, acuerdos y coordinación con las instituciones a las que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos para la puesta en marcha y desarrollo de las acciones de protección especializada contenidas en el plan de restitución de derechos, y verificación constante de que se están llevando a cabo en tiempo y forma; si están siendo efectivas; si es necesario hacer ajustes al plan de restitución de derechos si observa inviabilidad justificada en alguna de las acciones previstas; si es necesario agregar acciones al plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados.

Contempla un debido proceso que asegure la gestión participativa y la escucha permanente de las necesidades del niño y sus familiares, y el informe periódico de los avances ante la autoridad administrativa de protección o al Tribunal de Familia, según corresponda.

Los colaboradores acreditados que desarrollen esta línea de acción no podrán desarrollar ninguna otra.

La subvención de este programa de acción considerará como servicio prestado el desarrollo completo y oportuno del proceso de diagnóstico, la elaboración completa y precisa del plan de restitución de derechos, así como la gestión, y seguimiento eficiente del caso en los términos y plazos establecidos hasta su total resolución.

El reglamento que dictará el Ministerio de Desarrollo Social para la regulación técnica específica de las líneas de acción y sus programas, establecerá , en detalle, el debido proceso necesario para dar inicio a la protección administrativo, para la participación voluntario en los diagnósticos , la derivación de casos al sistema administrativo de protección, la coordinación del Servicio con la familia , el inter sector , los organismos colaboradores del Servicio , y los actores del entorno social y comunitario del niño; así como el procedimiento necesario para las derivación de casos al sistema judicial. Definirá también el procedimiento de gestión de casos; el informe periódico de los avances ante la autoridad administrativa de protección o al Tribunal de Familia, según corresponda, y el debido proceso que asegure la gestión participativa y la escucha permanente de las necesidades del niño y sus familiares.”

III. Para agregar un artículo 20 bis del siguiente tenor:

“Artículo 20 bis. De las Pericias. Corresponde a análisis realizados, a petición de la autoridad judicial, previa evaluación del sujeto u objeto de peritaje, por un profesional o equipo de profesionales hábiles y especialistas que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a obtener criterios certeros e indubitados útiles para la actividad probatoria procesal, que se traducen en un documento científico-legal, de carácter personal e intransferible, objetivo y coherente, fundado en evidencia contrastable y con sustento teórico.

Pueden ser de tipo médico, toxicológico, psicológico, familiar-sistémico, educativo, comunitario, socio-económico, y de cualquier otro tipo referido a áreas del conocimiento; se realizan respecto de los niños, niñas y adolescentes, su grupo familiar, adultos significativos y/o su entorno; y son requeridas por la autoridad judicial para la determinación precisa y objetiva de la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, las afectaciones sufridas, los daños ocasionados, y las acciones requeridas para la restitución de derechos y la reparación de los daños.

Un mismo niño, niña, adolescente, miembro de su grupo familiar o adulto significativo podrá ser objeto de uno o más pericias de distinta naturaleza, pero siempre evitando la sobre intervención y la revictimización.

La subvención de esta línea de acción considerará como servicio prestado el desarrollo completo de la pericia conforme a las reglas propias de su ciencia, su envío oportuno al Tribunal competente y su presentación oral en audiencia de juicio, en caso de ser requerido. El colaborador acreditado que participe en la línea pericial, no podrá desarrollar programas de la línea de diagnóstico, plan de restitución ni seguimiento que regula el artículo 20 de este cuerpo legal.”

IV. Para sustituir el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21. De la Restitución de Derechos. Corresponde al grupo de acciones, teóricamente y legalmente justificadas, diseñadas y desarrolladas por abogados, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, médicos, y demás profesionales requeridos, respecto de niños, niñas, y adolescentes en riesgo, desprotección, o que son víctimas de vulneración, su grupo familiar y/o o de adultos significativos, destinadas a disminuir los factores de riesgo, potenciar los factores protectores

presentes en el sistema familiar, y superar los obstáculos materiales y sociales que impiden el disfrute efectivo de sus derechos esenciales.

Conforman el plan de restitución integral de derechos y son ejecutadas coordinadamente por las diferentes programas de intervención del Servicio, conforme a su especialidad, y por los demás organismos del Estado en las materias y servicios de su competencia requeridas para cada caso concreto.

Aplica a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración de sus derechos, y a sus familias, o a los que se encuentran en situación de riesgo o desprotección producto de vulnerabilidad por circunstancias de carácter económico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultura, origen étnico o, nacional, situación migratoria o apatridia, aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, entre otras.

Incluye programas de fortalecimiento familiar o conjunto de acciones destinados a afianzar la capacidad de los padres, familiares y / o adultos significativos para ejercer el cuidado personal adecuado de un niño, niña o adolescente, y a apoyarlos en la mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que viven ,y que les dificulta el cuidado personal de sus hijos.

Incluye programas de atención de niños y niñas inimputables por razón de edad que incurrir en conductas infractoras de ley con el fin de darles atención multifocal especializada tendiente a la superación de las condiciones que desencadenan los comportamientos infractores de ley y a la satisfacción plena de sus necesidades con vistas a la adecuación paulatina de su comportamiento.

La subvención de esta línea de acción considerará como servicio prestado el cumplimiento, completo y oportuno de las prestaciones requeridas por cada niño para el logro de los objetivos restaurativos individuales, familiares y sociales, propios de cada programa de intervención, y no el mero tránsito y egreso o de los niños, niñas y adolescentes, o de los miembros de su familia, por el respectivo programa”.

V. Para sustituir el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22. De la Reparación. Corresponde al conjunto de acciones diferenciadas, preferenciales e integrales destinadas a la rehabilitación y reparación de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, determinadas con justicia, oportunidad y suficiencia, con la participación de las víctimas y/o sus representantes legales, atendiendo a sus necesidades y expectativas de modo de que se produzca el efecto reparador.

Se entiende por rehabilitación el conjunto de intervenciones diseñadas y desarrolladas para recuperar física, psicológica y emocionalmente al niño, niña y adolescente de las enfermedades trastornos, lesiones o traumatismo ocasionados a raíz de vulneraciones de derechos, y por reparación, aquellas destinadas a aliviar en parte el sufrimiento padecido, a restituir en lo posible la dignidad de la que ha sido privados, y a perseguir la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a raíz de vulneraciones de derechos, acordes con la entidad del daño sufrido.

La reparación implica la representación judicial o coadyuvancia en procedimientos judiciales y administrativos para el logro de tales objetivos.

La reparación no puede confundirse con la asistencia humanitaria y satisfacción de otras necesidades por parte del Estado.

No puede implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las violaciones establecidas.

La subvención de esta línea de acción considerará como servicio prestado la recuperación física y psicológica y emocional del niño objetivamente establecida, la obtención judicial o extrajudicial de la indemnización posible de los perjuicios ocasionados, y la opinión positiva del niño, niña o adolescente respecto del alivio del sufrimiento padecido y la restitución de su dignidad, según corresponda de acuerdo a la naturaleza de cada programa.

VI. Para sustituir el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23. Revinculación y Reintegración familiar. Corresponde al proceso gradual , continuo y supervisado compuesto de un conjunto de acciones acordes a la edad del niño, sus necesidades, desarrollo evolutivo y la causa de la separación, destinados a afianzar la capacidad de los padres, o de familiares que puedan asumir el cuidado personal, de un niño, niña o adolescente que se encuentre en un acogimiento alternativo, de tipo residencial o familiar, para ejercer dicho cuidado por sí mismos de un modo adecuado, propiciando su más pronto egreso y reintegración familiar.

La situación del niño ha de ser evaluada por una persona o un equipo debidamente designado que tenga acceso a asesoramiento multidisciplinario, en consulta con el niño, la familia, el acogedor alternativo, a fin de decidir si la reintegración del

niño en la familia es posible y redundante en favor del interés superior de este, qué medidas supondría y bajo la supervisión de quién.

Los objetivos del proceso de revinculación, la reintegración y las tareas principales de la familia y el acogedor alternativo a este respecto se acordarán por todos los interesados y constarán por escrito.

Son parte esencial de la línea los programas de apoyo a la familia para el desarrollo de una parentalidad positiva ; el apoyo y supervigilancia de los contactos regulares y apropiados entre el niño y su familia específicamente a los efectos de la reintegración; y la coordinación de los ejecutores del programa respectivo con los demás organismos del Estado que conforme a sus funciones coadyuven al fortalecimiento de las habilidades, competencias y de todo tipo recursos requeridos por la familia para la recuperación del cuidado de sus hijos.}

La subvención de esta línea de acción considerará como servicio prestado la formación de las familias de origen en parentalidad positiva conforme a indicadores objetivos de logro; el cumplimiento de los contactos regulares y apropiados y de las tareas acordadas para el acogedor alternativo ; y la efectiva revinculación y reintegración.

VII. Para modificar el artículo 24 del siguiente modo:

1. Para sustituir el inciso primero del artículo 24, por el siguiente:

“Artículo 24.- Del cuidado alternativo. Corresponde al conjunto de modalidades alternativas de cuidado puesta a disposición niños, niñas y adolescentes que por diversas circunstancias no cuenta con los cuidados permanentes de al menos uno de sus padres biológicos o adoptivos, o de adultos en condiciones de responsabilizarse de su crianza, ejecutadas por cuidadores especialmente entrenados para amparar y restituir los derechos de niños y niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad emocional y afectiva”.

2. Para sustituir el inciso segundo del artículo 24, por el siguiente:

“El cuidado alternativo es una medida de protección de exclusiva competencia de la autoridad judicial, de ultima ratio, excepcional y temporal, preferentemente desarrolladas en acogimiento de tipo familiar, y, secundariamente, en centros de acogida institucional. Están destinadas a proporcionar, de forma estable pero provisoria, a los niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar, alojamiento, alimentación saludable, abrigo, estimulación precoz, apoyo afectivo y psicológico, seguridad personal en el acogimiento, contactos regulares con sus

padres, otros parientes y/o adultos significativos, cuidados de salud, acceso y continuidad educacional, a la salud, deporte, recreación, cultura, y a los demás servicios necesarios para su bienestar y desarrollo, proporcionados por los mismos cuidadores en uso del aporte financiero entregado por el efecto al Estado, o en virtud de la gestión obligatoria y oportuna de las redes de servicios estatales competentes que correspondan”.

3. Para agregar un inciso tercero nuevo del siguiente tenor:

“La línea incluye, en orden de preferencia, acogimiento familiar nuclear con hermanos adolescentes capaces de asumir su cuidado, acogida en familia extensa, en familias de adultos de confianza, en familias de acogida externas acreditadas; y acogimiento residencial. Y se desarrolla, al menos, a través de los siguientes programas:

1. Guía, apoyo financiero y monitoreo de hermanos adolescentes cuidadores
2. Asesoría, apoyo financiero y seguimiento de la familia extensa y de las familias de adultos de confianza, que fungen como cuidadora;
3. Familias de acogida de emergencia
4. Familias de acogida especializada para niños y niñas entre 0 y 3 años de edad.
5. Familias de acogida especializada para niños, niñas y adolescentes en rangos etarios superior a 4ª años.
6. Familias de acogida especializada para niños y niñas mayores de 4 años, y adolescentes, con discapacidad
7. Apoyo y asesoramiento regular para guardadores familiares.
8. Residencias para niños, niñas y adolescentes en rangos etarios superior a 4ª años
9. Residencias especializadas para niños y niñas mayores de 4 años, y adolescentes, con discapacidad

4. Para agregar un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor:

“Los niños y niñas entre 0 y 3 años de edad serán siempre acogidos en modalidad familiar”

5. Para agregar un inciso quinto nuevo del siguiente tenor:

“No podrán ser acogedores alternativos quienes tengan interés en la adopción de niños, niñas o adolescentes. Ellos sólo podrán participar en la línea de acción de adopción”.

6. Para agregar un inciso sexto nuevo del siguiente tenor:

“La línea no incluye el acogimiento de adolescentes embarazadas en condiciones de vulnerabilidad, quienes han de ser atendidas y apoyadas a través de la línea de restitución de derechos en su doble condición de adolescente y gestante”.

7. Para agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor:

“La subvención de esta línea de acción, con excepción del acogimiento con hermanos guardadores que contendrá factores especialmente diseñados al efecto, considerará par el pago el servicio prestado. Se entenderá por tal, el cumplimiento, completo y oportuno de los indicadores de logro de los objetivos establecidos en el programa respectivo, los que deberán contener, por cada niño acogido, a lo menos, la prestación efectiva de alojamiento en lugar seguro y acogedor, alimentación saludable, abrigo, estimulación precoz, apoyo afectivo y psicológico, seguridad personal en el acogimiento, contactos regulares con sus padres, otros parientes y/o adultos significativos, cuidados de salud, acceso y continuidad educacional, a la salud, deporte, recreación, cultura, y a los demás servicios necesarios para su bienestar y desarrollo, y no la mera ocupación de la plaza por los niños, niñas y adolescentes”

VIII. Para agregar un artículo 25 bis del siguiente tenor:

“Artículo 25 bis. De la Revinculación y Reintegración familiar. Corresponde al proceso gradual y supervisado compuesto de un conjunto de acciones acordes a la edad del niño, sus necesidades, desarrollo evolutivo y la causa de la separación, destinados a afianzar la capacidad de los padres, o de familiares que puedan asumir el cuidado personal, de un niño, niña o adolescente que se encuentre en un acogimiento alternativo, de tipo residencial o familiar, para ejercer dicho cuidado por sí mismos de un modo adecuado, propiciando su más pronto egreso y reintegración familiar.

La situación del niño ha de ser evaluada por una persona o un equipo debidamente designado que tenga acceso a asesoramiento multidisciplinario, en consulta con el niño, la familia, el acogedor alternativo, a fin de decidir si la reintegración del niño en la familia es posible y redundante en favor del interés superior de este, qué medidas supondría y bajo la supervisión de quién.

Los objetivos del proceso de revinculación, la reintegración y las tareas principales de la familia y el acogedor alternativo a este respecto se acordarán por todos los interesados y constarán por escrito.

Son parte esencial de la línea los programas de apoyo a la familia para el desarrollo de una parentalidad positiva ; el apoyo y supervigilancia de los contactos regulares y apropiados entre el niño y su familia específicamente a los efectos de la

reintegración; y la coordinación de los ejecutores del programa respectivo con los demás organismos del Estado que conforme a sus funciones coadyuven al fortalecimiento de las habilidades, competencias y de todo tipo recursos requeridos por la familia para la recuperación del cuidado de sus hijos”.

IX. Para agregar un artículo 25 ter del siguiente tenor:

“Artículo 25 ter. De la Preparación y Acompañamiento para la Vida Independiente. Corresponde al conjunto de acciones desarrolladas sistemáticamente, y con antelación suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines, desarrolladas por los centros de acogida con el fin de preparar a los niños, niñas o adolescente para asumir su independencia e integrarse plenamente en la comunidad, en particular su preparación para la vida cotidiana, el trato y desenvolvimiento social, la educación y la formación profesional continua de jóvenes.

Incluye acciones para el tránsito a la vida adulta mediante procedimientos planificados con la participación de los niños, niñas y adolescentes atendiendo el género, la edad, el grado de madurez y las circunstancias particulares de éstos a fin de desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades personales para la vida cotidiana se fomenta, entre otras acciones, mediante su participación regular en la vida de la comunidad local; acciones para la autonomía que ofrecen oportunidades de educación y formación profesional continua de los jóvenes a fin de ayudarles a lograr la independencia económica y a generar sus propios ingresos; y acciones en favor de los emancipados destinadas a proporcionar a los jóvenes, orientación, apoyo y seguimiento, en especial para evitar la explotación, acceso a los servicios sociales, jurídicos, de salud, educación, vivienda y asistencia financiera adecuada durante su reinserción social. hasta los 24 años de edad, o hasta los 28 años, si el joven o la joven se encuentra en un proceso de educación y formación profesional continua”.

X. Para modificar el artículo 25 del siguiente modo:

1. Para eliminar en el inciso primero la frase: “La adopción es siempre subsidiaria.”

2. Para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Esta línea de acción no podrá ejecutarse respecto de ningún niño, niña o adolescente que se encuentre en proceso de re vinculación y reintegración familiar, ni respecto de los hijos de madres adolescentes en conflicto con su maternidad, sin que éstas hayan sido atendidas previamente por un programa especial de la línea de restitución diseñado para atender su doble condición de

vulnerabilidad. La adopción es siempre subsidiaria, y la adopción nacional prefiere siempre a la internacional”.

3. Para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“Incluye el desarrollo de los procesos necesarios para el apoyo y orientación a la familia de origen que decide voluntariamente renunciar a la guarda de su hijo. ante un juez de familia; para el apoyo ,acompañamiento y preparación del niño, niño o adolescente para afrontar el proceso de adopción en su integralidad; las acciones destinadas a la formación, preparación y acompañamiento de los solicitantes de adopción; y el apoyo de las familias adoptivas constituidas, incluyendo la búsqueda de orígenes.”

4. Para agregar un inciso sexto del siguiente tenor:

“La línea de adopción es incompatible con las demás líneas de acción”.

5. Para agregar un inciso séptimo del siguiente tenor:

“La entrega de niños, niñas o adolescentes a familias adoptivas sin cumplir con todos los requisitos y procesos que la ley dispone al efecto, tenga o no asociado el pago de contraprestaciones al autor, constituye tráfico ilícito de menores y deberá ser denunciado por cualquiera que tenga conocimiento de ello”.

XI. Para sustituir la palabra “podrá” por “deberá” en el artículo 39.

XII. Para modificar el artículo 9, Consejo de Expertos, del siguiente modo:

En la letra b)

Agregar a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente frase:

“y evaluar las propuestas que envíen de los Directores Regionales al mismo efecto.”

En la letra c)

Agregar a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente frase:

“así como en normativas y regulaciones internas, protocolos y procedimientos de actuación requeridos de validación externa, por ejemplo, para enfrentar situaciones de emergencia, aplicación de sistemas de contención emocional de

niños, niñas y adolescentes, manejo de crisis; administración y manejo de medicamentos; prevención del abuso sexual intra residencial, entre otras.

XIII. Para sustituir en la letra c) del artículo 10, la frase “un profesional del área de las ciencias de la salud” por la siguiente:

“dos médicos psiquiatras infanto-juveniles y un psicólogo”

XIV. Para agregar en el inciso segundo del artículo 11, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente frase:

“A los miembros del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez le afectarán las mismas inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 12 de la presente ley”.

X. Para agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor:

“Un decreto del Ministerio de Desarrollo Social establecerá la forma y procedimientos en las que los miembros en ejercicio del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez afectos a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 12 de la presente ley, dejarán sus cargos y serán reemplazados por el período que les resta cumplir.”

XI. Para intercalar, en el inciso primero del artículo 15, a continuación del punto seguido, que pasa a ser una coma, la siguiente oración:

“sin perjuicio de que pueda autoconvocarse en situaciones urgentes o necesarias conforme a la decisión de la mayoría de sus integrantes”.

XII. Para modificar el inciso segundo del artículo 15 en el siguiente sentido:

- 1) Para intercalar entre las palabras “Expertos” y “celebrar”, eliminando la palabra “deberá”, la siguiente frase:

“sesionará todas las veces que sea necesario para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones, debiendo”.

- 2) Para intercalar entre las palabras “servicio” y “mediante”, la siguiente frase:

“o tenga lugar una auto convocatoria”

XIII. Para agregar en el inciso primero del artículo 16, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“El Estado establecerá un mecanismo que permita hacer efectiva la garantía de atención y de efectiva priorización, en especial, en aquellos lugares del país que carezcan de tales prestaciones o que poseen una cobertura insuficiente”.

XIV. Para modificar el artículo 17 del siguiente modo:

- 1) Trasladar dentro del inciso primero, la frase “sin perjuicio de las facultades del propio Servicio en la materia” al final de la primera oración, a continuación del punto seguido, que pasa a ser una coma.
- 2) Agregar, al final del inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Es esencial a su labor evaluar, diseñar, planificar, y tomar las decisiones, con carácter vinculante, necesarias para articular y materializar la acción conjunta del intersector, de un modo constante y conforme a los lineamientos, objetivos, actividades, metas e indicadores establecidos en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia, a fin de materializar la protección oportuna y eficiente en todo el territorio nacional”.

- 3) Intercalar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido que pasa a ser una coma, la siguiente frase:

“sin perjuicio de que se convoque en situaciones urgentes o necesarias conforme al criterio de la mayoría de sus integrantes”.

- 4) Intercalar en el inciso segundo, una nueva letra a), pasando la actual a) a ser b), y así sucesivamente:

“a) Ministerio de Hacienda”.

5) Agregar, al inicio del inciso cuarto, la siguiente oración: “La Comisión, con vistas a una mayor eficiencia, podrá funcionar también a través de mesas especializadas de coordinación para la integración sostenidas de servicios por áreas.

6) Intercalar en el inciso quinto, a continuación del punto seguido que pasa a ser una coma, la siguiente frase:

“informando las medidas adoptadas para superar tales descoordinaciones”
